Exposición del enfoque sociológico

Héctor Rosada Granados

Las modalidades de organización social que los individuos definen, con el propósito de producir en forma conjunta los bienes y servicios que les son indispensables para sobrevivir, determinan, sin lugar a duda, las modalidades de organización política e ideológica dominantes al interior de una sociedad concreta, históricamente determinada.

Esta organización social de la producción determinará, a su vez, el tipo de ubicación de cada individuo al interior de la división social del trabajo en esa sociedad concreta, el alcance e importancia del esfuerzo individual en este proceso y la cantidad y calidad de bienes y servicios que le corresponden, como retribución por su participación en la generación de la riqueza socialmente producida.

La organización política e ideológica determina los elementos coercitivos al interior del ordenamiento social, ya se trate del simple uso de la fuerza o de la refinada dominación ideológica.

Estos tres niveles de organización, económica, política e ideológica, caracterizan a un modelo de acumulación determinado, a partir del cual se definen los procesos de circulación, distribución y apropiación de la riqueza socialmente producida.

Esta situación estructural genera al interior de la sociedad, diversas contradicciones derivadas de la situación en que cada individuo ha sido ubicado al interior de la estructura (situación de clase), una de las cuales se define como fundamental, expresando la relación de apropiación individual del excedente producido socialmente, tipificando un acto de desappropriación en contra de aquellos que lo han generado a partir de la organización social del trabajo.

Esta contradicción fundamental, definida entre el que explota y aquel que es explotado, sólo podrá resolverse si se transforma el orden estructural vigente; sin embargo, en condiciones históricas determinadas, particularmente en períodos de transición, es posible intentar su concilia-

ción para lograr madurar condiciones que hagan propicia su resolución, sin tener que apelar a la transformación violenta del sistema.

En el modelo económico implantado a partir de 1944, debemos buscar las causas fundamentales de la actual crisis estructural que en la actualidad experimenta nuestro país.

La acumulación capitalista y su correspondiente modelo de dominación de clase, reforzado mediante concepciones ideológicas estimuladoras del individualismo extremo, fueron estructurando con el paso del tiempo a un sistema de organización social de la producción, que ha enriquecido a algunas minorías y empobrecido a sectores mayoritarios de nuestra población.

Este modelo de acumulación basado en la producción social de excedentes, ha impuesto mediante su dominación la apropiación individual de la riqueza generada socialmente, condenando a la población productora a un estricto nivel de casi supervivencia y, en las actuales circunstancias, a un empobrecimiento progresivo y creciente.

Esta es la condición de donde se deriva la base principal del antagonismo fundamental definido entre aquel que es explotado y aquel que se beneficia con la explotación.

La necesidad de reproducir ampliamente el ciclo de la acumulación capitalista, ha entronizado en nuestra sociedad un sistema político que, acorde con los intereses del modelo económico dominante, ha dado vigencia a través de nuestra historia a brutales modalidades de represión en contra de las clases populares, con énfasis en los asalariados y en los campesinos. A la par ha generado apoyos en favor de las clases dominantes, con destino preferencial hacia los propietarios de la tierra y del capital.

Como modalidad del sistema de acumulación capitalista, se generan al interior de la estructura social fuertes tensiones y conflictos definidos entre las clases dominantes, motivados por la necesidad de controlar al trabajo asalariado, temporal o permanente, o por la competencia que se deriva del acceso a las condiciones que propician la reproducción ampliada de sus capitales.

Esta situación les conmina a tratar de conciliar sus intereses económicos contradictorios, por intermedio de su organización política de clase determinada a dos niveles: Uno que corresponde directamente a su propio poder de clase y otro en el que se ven obligados a compartir con otras fuerzas sociales el proceso de toma de decisiones en la dimensión nacional.

En el primer nivel de organización (Bloque en el Poder) las clases dominantes intentan conciliar sus diferencias, mediante la consolidación de su organización de clase en comités coordinadores, cámaras o asociaciones, a la par de concretar y divulgar sus principios ideológicos y doctrinarios, especialmente los referentes al liberalismo económico y a la no intervención del estado en el sistema económico.

En el segundo nivel de organización (El Estado) las clases dominantes deben compartir el proceso de toma de decisiones con dimensión nacional, con otras fuerzas sociales que, por motivos coyunturales, se hacen representar en este espacio político; podemos incluir dentro de ellas a los altos mandos militares, a las avanzadas ideológicas de los medianos

capitalistas y de los estratos medios y, en circunstancias históricas particulares, aun a representantes de las clases populares.

Ambos niveles de organización de clase (El Bloque en el Poder y El Estado) corresponden a dimensiones de la realidad que no son perceptibles a simple vista; para su captación y comprensión es preciso desplegar un proceso de pensamiento analítico, crítico y reflexivo.

A nivel de la estructura social se manifiesta otra dimensión política que caracteriza la imagen externa de la dominación de clase (Escena Política), en la que se definen los brazos ejecutores de las decisiones asumidas al interior del Bloque en el Poder, filtradas mediante la intervención del Estado, así como su propia representación en partidos.

En esta dimensión visible y perceptible se ubican, además de los partidos políticos representantes del interés de clase, los aparatos de dominación del estado, es decir las concepciones dominantes en relación a la educación, la religión, el derecho, la democracia, la legitimidad, la justicia, los ejércitos, las policías, las burocracias de la administración pública y de la administración judicial.

A partir de este enfoque teórico, la función del Estado se limita con prioridad en lograr y mantener la cohesión al interior del Bloque en el Poder y a desmovilizar a las clases populares. Esta doble función permite que ciertas fuerzas sociales representadas en el Estado pero no subordinadas directamente a las clases dominantes, logren una autonomía relativa respecto al Bloque en el Poder, consituyéndose en factor de intermediación entre aquellos que son explotados y aquellos que se benefician con la explotación.

Estas fuerzas sociales que por su posición estructural logran autonomizar al Estado respecto al Bloque en el Poder, intentan cohesionar el orden estructural vigente y supuestamente representar a todos los guatemaltecos, ubicándolos desde una perspectiva de individuos aislados y no como colectivos organizados política e ideológicamente.

La crisis que actualmente estamos protagonizando es efecto directo de este modelo de dominación y de las contradicciones que genera a su interior. Por una parte, como expresión de su contradicción fundamental, una población rica en recursos y en posibilidades de producirlos, vive materialmente al borde de la miseria, en tanto una élite minoritaria se apropia de la riqueza generada socialmente y la expatria hacia sus cuentas bancarias en el extranjero, fortaleciendo el poder financiero del capitalismo internacional, ese mismo que ahora exige al gobierno de turno la implantación de nuevos impuestos, que gravarán indudablemente a los sectores más empobrecidos, a fin de lograr el pago y mantenimiento de deudas externas, cuyos fondos fueron aplicados, en su mayoría, a generar apoyos en beneficio del ciclo de reproducción ampliada de los capitales privados, o retornaron nuevamente al sistema financiero internacional para engrosar las cuentas bancarias de los culpables del saqueo y de la corrupción.

Por otra parte, existen amplios sectores productivos no vinculados directamente con el capitalismo monopólico, pero sí subordinados a él, que no han asumido posiciones críticas para revertir este ordenamiento opresivo y explotador, con lo cual han bloqueado toda posibilidad de

búsqueda e implementación de otras modalidades de producción social y de un nuevo ordenamiento que genere una coexistencia pacífica y constructiva.

Esta contradicción secundaria es efecto del subdesarrollo del modelo capitalista de producción dominante en Guatemala, al extremo de limitar sus propias capacidades de expansión y crecimiento, debido a que imposibilita la generación de un sólido mercado interno y, con esto, subutiliza los recursos disponibles y condena a las grandes mayorías a la marginalidad y a la miseria.

Si estas contradicciones se agudizan estaremos protagonizando la explosión violenta de un proceso de descomposición interna de nuestra sociedad, a un costo humano aún no previsible.

Es alarmante, también, la actitud neo-colonialista asumida al pretender prolongar la sumisión del indígena, argumentando su supuesta incapacidad para asumir sus propias decisiones y estrategias. Han convertido al indígena en indio, es decir, en siervo colonial, a través del entorpecimiento de su mente y del despojo de su tierra. Lo han obligado a sentirse avergonzado de su condición de indígena, a negar su identidad étnica y a esconderse bajo máscara de ladino.

La sociedad guatemalteca no es dual como a veces se pretende hacer creer; nuestra estructura social no está compuesta por dos sociedades diferentes y hasta cierto punto autónomas, aunque necesariamente vinculadas; es falso que la población indígena corresponda a la llamada *sociedad tradicional*, arcaica, agraria, estancada y retrógrada; como tampoco es cierto que la población que se identifica como ladina corresponda con la *sociedad moderna*, urbanizada, industrializada, dinámica, progresista y en permanente desarrollo. Mucho menos cierto es la supresión de la sociedad tradicional y la desaparición de los remanentes de la dominación oligárquica-terrateniente, van a derivar en la eliminación de los obstáculos que se oponen a nuestro desarrollo y en el despegue y consolidación de una sociedad moderna, capitalista y progresista.

Tanto indígenas como mestizos son resultado de un mismo y único proceso histórico, el que en forma desigual y combinada los han vinculado estructuralmente. A nivel de la organización étnica como resabio de ancestrales vínculos, simbolismos, tradiciones, ritualizaciones y valores; a nivel de la estructura de clases como efecto estructural del predominio capitalista en una sociedad dependiente.

Es más importante el tipo de relaciones que sostienen que la apariencia de sus diferencias; la bonanza de las zonas urbanas en las que se invierte el excedente obtenido, contrasta dialécticamente con la miseria de las zonas rurales en donde se produce la riqueza.

Si esta contradicción secundaria se agudiza, habremos estimulado un estéril enfrentamiento inter-étnico; si somos capaces de conciliarla, habremos logrado sentar las bases para iniciar la construcción de nuestra identidad nacional.

Nuestra crisis es estructural porque abarca todos los niveles de nuestra sociedad; se hace evidente en lo económico, en lo cultural y en lo social; se ha generado a partir del agotamiento del modelo de super-explotación dominante y ha contaminado progresivamente a todo el ordenamiento social, deteriorando sus valores, tradiciones, instituciones y principios.

La desigualdad social ha corroído la solidaridad y la cooperación; el impulso voraz de la libre competencia ha destruido los principios del intercambio mercantil; la super-explotación del trabajo ha negado la vigencia del estado de derecho en momentos en que ni la fuerza institucional es capaz de dominar; la opresión y la represión sistemática han hecho negatoria la libertad individual y la dignidad humana.

Si la explosión violenta que anticipamos anteriormente llega a alcanzarnos, poco quedará del actual ordenamiento social. Serán tan grotescos sus efectos en destrucción y sufrimiento, que la recuperación futura involucrará a más de una generación, sin contar con la garantía que el producto final llegue a asemejarse con la sociedad justa y humana que tanto hemos deseado construir.

Por todo lo anterior es indispensable tratar de conciliar estas contradicciones; debemos, a toda costa, procurar eliminar la explotación del *hombre por el hombre*, a partir de una actitud valiente, racional y humana, la cual nos permita alterar el modelo de acumulación dominante, orientar las fuerzas sociales hacia la construcción de la nueva sociedad y liberar las mentes de los guatemaltecos de los prejuicios, mitos y estereotipos, impuestos por minorías voraces capaces de desencadenar una catástrofe en la que *el hombre destruya al hombre*, si es que el hambre no lo destruye primero.

El nuevo modelo económico deberá considerar, prioritariamente, la autosuficiencia alimentaria de nuestra población; la generación de excedentes suficientes para revertirlos en inversión capaz de elevar el nivel de vida de todos los guatemaltecos; el procesamiento de nuestros recursos naturales y la facilitación de procesos productivos de ocupación plena; la circulación ampliada de bienes y servicios libres de tendencias especulativas e inflacionarias; la diversificación productiva y el desarrollo de tecnologías apropiadas; y, sobre todo, criterios de distribución de la riqueza acordes al esfuerzo empleado en producirla.

El nuevo ordenamiento social deberá considerar la participación organizada como la base fundamental de su dinámica interna; una firme y consistente política de capacitación del guatemalteco a nivel productivo, organizativo, intelectual, político, ideológico y espiritual, a partir de la cual cimentar la nueva generación capaz de construir la nueva sociedad.

Para lograrlo debemos descartar la opción violenta y asumir con absoluta entrega la opción racional; dialogar en lugar de matar; conciliar en lugar de agredir; generar condiciones para que un sólido desarrollo ideológico y una fuerte organización popular, sean las bases del proceso encaminado a lograr el entendimiento futuro, en una sociedad que respeta y que se respeta a sí misma.

Nunca antes fue tan importante conciliar nuestras diferencias, unificar nuestros criterios y establecer un frente común contra la explotación que empobrece y contra la represión que humilla.

Es fundamental iniciar un proyecto de construcción nacional principiando por la definición de sus bases ideológicas y operativas; es impostergable enfrentarnos al reto de caracterizar qué tipo de sociedad y qué tipo de guatemalteco estamos en disposición de principiar a construir.

En este proyecto existe espacio para todos; sean bienvenidos todos los

guatemaltecos de buena voluntad capaces de poseer la suficiente apertura mental como para comprender este mensaje; el mínimo sentimiento humanitario como para rechazar la explotación y la opresión; la enorme disposición de aceptar este reto y el coraje indispensable para iniciar el camino, en el entendido que Guatemala no podrá caminar si nosotros no caminamos adelante.

Comentario a la exposición del enfoque sociológico

René Poitevin Dardón

He leído con mucha atención el trabajo del Licenciado Rosada y me parece de mucha calidad y sobre todo muy valiente. Creo que como todo enfoque sociológico tiene sus riesgos, desde el punto de vista metodológico, especialmente el de quedarnos en un análisis general, vale decir poco específico, que no permite la consideración concreta para el caso histórico de Guatemala. Pero al mismo tiempo creo que tiene la virtud de ofrecer muchas riquezas y sugerencias. Es justamente aprovechando esta riqueza, que me voy a permitir hacer algunas reflexiones que surgen de las consideraciones del autor.

Creo que el trabajo está basado en un análisis estructural global, que me parece correcto como marco referencial para situar la dimensión sociológica, que a mi manera de ver, debe constituir el centro del análisis del problema.

Efectivamente, en Guatemala, existen varias contradicciones que como en toda sociedad capitalista están presentes bajo el signo de la contradicción fundamental. Aquí Hector Rosada nos presenta la afirmación de que, "este sistema, basado en una apropiación individual de la riqueza, ha condenado a la población productora a un estricto nivel de supervivencia y en las actuales circunstancias a un nivel de empobrecimiento progresivo evidente".

En este sentido, quiero llamar la atención hacia la consideración de que si bien todo sistema capitalista engendra inevitablemente contradicciones, en el caso guatemalteco estas han sido acumuladas en un largo proceso debido a las modalidades de aplicación que este sistema ha tenido en los últimos treinta años.

En otras palabras, es evidente que al construirse un modelo económico tan excluyente y polarizante, se ha llegado a poner en peligro el sistema mismo como un todo. La modalidad de aplicación del capitalismo en Guatemala en los últimos treinta años presenta las características de la

política de tierra arrasada, que no solamente nos ha llevado a la actual crisis sino que compromete la continuidad del proceso.

También quiero señalar que el enfoque de la contradicción indio-ladino que hace el autor, me parece muy acertada, al situarla subordinada a la contradicción principal, como una contradicción secundaria de índole básicamente cultural e ideológica, pero jamás elevada al rango de contradicción racial o afirmando la dualidad de la sociedad, argumento totalmente superado en las ciencias sociales de latinoamérica.

A partir de lo anterior, el Licenciado Rosada toca brevemente la función del Estado en cuanto a que una de sus funciones específicas es la de mantener la cohesión social, pero no se refiere a otra que se relaciona íntimamente con la anterior, cual es la de llevar a cabo la reproducción del sistema como un todo. Del éxito que un Estado logre en la realización de estas dos funciones se derivará en definitiva la legitimidad que un Estado tenga respecto de sus súbditos.

El autor nos habla en su trabajo de fuerzas sociales que el bloque en el Poder intenta cohesionar para lograr estructurar por este medio un Estado legítimo. Esto yo creo que es muy importante y nos da pie para resumir apretadamente algunas reflexiones sobre la Democracia y la Sociedad que de alguna manera ya estuvieron presentes en el trabajo del anterior seminario de "ASIES".

Para que exista Democracia es necesario que existan las condiciones sociales para que ésta se dé. Una democracia sabemos que no es de ninguna manera un acto eleccionario. Hemos dicho que la Democracia se construye con el quehacer diario, con la participación de todos los ciudadanos. En este sentido creo que la organización de la población en todos los niveles de la sociedad es un paso indispensable para que podamos hablar de que realmente estamos construyendo una democracia.

En el caso guatemalteco, la sociedad civil no ha estado suficientemente organizada en forma moderna y eficiente, tanto en lo económico como en lo político.

Por otra parte, sobre esta realidad vino a operar el fenómeno de la violencia que golpeó y desarticuló profundamente ese tejido social. Esto hay que reconstruirlo si se quiere hablar de democracia, o mejor dicho sentar las bases de un proceso democrático. Es necesario reestructurar la sociedad civil y no solamente el sistema económico o la sociedad política. Esto quiere decir, desde la organización sindical, hasta organismos de base que sirvan a los regímenes políticos de verdaderos canales de mediación para su posterior legitimación. Así pues, la democracia política debe asentarse sobre una democracia social. La democracia social para que pueda existir, debe estar a su vez edificada sobre una democracia económica o por lo menos sobre una sociedad civil que en su estructura permita y reproduzca con todo dinamismo ese proceso democrático.

Dentro del capitalismo es imposible terminar con las desigualdades y en ese sentido, también la democracia perfecta desde luego no existe. Pero, sí es posible sentar las bases de un desarrollo dentro de un sistema con un perfil más humano y que tenga características incluyentes y que permita el desarrollo y reproducción del capitalismo como tal, es decir, justamente lo

contrario de lo que en este momento se da en Guatemala y que dicho sea de paso, es aun propuesto por algunos con maquillaje ideológico prestado al neoliberalismo.

Es bien sabido por todos, que el sistema económico, político y social que se ha dado en Guatemala hasta la fecha está en sus últimos estertores y no es con la hecatombe o con la muerte de las dos terceras partes de la población como se va a resolver el problema.

Para construir la democracia es necesario también encontrar una nueva hegemonía, mejor dicho, construir una nueva hegemonía que sea capaz de reconstruir la sociedad y al mismo tiempo que tenga la flexibilidad suficiente como para instaurar una serie de mediaciones entre la sociedad civil y la política que le permitan un continuo proceso de legitimación al régimen político, pero más aún y sobre todo al nuevo Estado que se construye como producto de este nuevo pacto de fuerzas sociales.

En esta dimensión las políticas sociales de un Estado de tal naturaleza son y deben ser la herramienta privilegiada para lograr esa legitimación. Un Estado que se convierta en el motor del desarrollo y asuma sus más pesadas tareas en pos del bienestar social y económico de la población, estará legitimándose.

En este sentido, construir una nueva hegemonía significa algo más que un pacto político formal entre partidos. Significa en primer lugar, tener la credibilidad y la autoridad moral suficiente como para asumir una posición de Estado en contra de una mera posición política coyuntural, es decir tratar de situarse por encima de la querrela diaria de los intereses políticos cotidianos.

Al mismo tiempo significará, el PODER necesario para convertirse en realmente hegemónico, es decir, estar en capacidad real de ser obedecido por medio de logros de consenso y de tener el poder real de decidir en ese sentido.

Por otra parte va a significar la construcción de organizaciones sociales y políticas que canalicen y moldeen los diferentes factores de la dominación. Esto último al mismo tiempo que se hace uso de una ideología que sea verdaderamente movilizadora y de carácter nacional. Pensamos que la fe en la democracia es y debe ser la llama que alimente esta toma de conciencia, que debe dar la participación a la mayoría de la población.

En resumen, un pacto social y político requiere de un reordenamiento de la sociedad, mejor dicho de las fuerzas sociales, la construcción de una nueva hegemonía y de una nueva legitimidad basada en la democracia, en ese sentido, se está proponiendo ni más ni menos que la construcción de un nuevo Estado en el sentido amplio del término.

Pienso que la idea no es nueva ni muy atrevida ante el reto de las circunstancias, en todo caso el trabajo de Héctor Rosada me ha dado la base para estas reflexiones que quieren ir un poco más allá de lo que cotidianamente preocupa.

1a. Exposición del enfoque político

Karin Erbsen de Maldonado

La instauración de un régimen democrático, constitucional y participativo se plantea actualmente como un nuevo reto a la sociedad guatemalteca. Por democracia queremos entender en grandes rasgos, un sistema socio-político que se base en los ideales de igualdad y libertad para todos, tanto de la democracia política como de la democracia económica y social. ¿Será viable en Guatemala la iniciación de un sistema semejante en la actual coyuntura política? Ello dependerá principalmente de la posible adhesión que pueda obtener la democracia por parte de las diferentes fuerzas políticas y sociales que actúan sobre el sistema, tanto internas como externas.

TENDENCIAS EN LA ACCION POLITICA

A nivel interno de la sociedad habrá que distinguir tres orientaciones fundamentales de la acción política, dependiendo de las respectivas metas y objetivos que persiguen las fuerzas sociales en juego; objetivos que para su logro no necesariamente implican el uso de los mismos instrumentos políticos:

1) *El mantenimiento primordial de estructuras y privilegios existentes.* Para esta *tendencia conservadora*, en el fondo es indiferente el tipo de régimen político que se instaure. Prevalece el fin sobre el medio. Las fuerzas conservadoras buscarán y apoyarán siempre al régimen que mejor sirva a sus intereses.

2) *La transformación paulatina del orden existente hacia un nuevo orden social* que idealmente satisfaga las necesidades y aspiraciones de todos los miembros de la comunidad. El orden existente no es considerado un valor en sí. Todo orden social no se concibe como punto final de contenido fijo sino como un pacto, de contenido siempre cambiante, negociado entre las distintas fuerzas sociales de acuerdo a reglas de juego que se establecen. El cambio social se institucionaliza sobre un acuerdo

común básico de todos los participantes. Medio y fin político, se interrelacionan íntimamente. Para la *tendencia transformadora*, el régimen democrático se pone como principio de la acción política.

3) *El cambio profundo del orden existente y su sustitución revolucionaria* por un nuevo orden social orientado hacia la satisfacción de las necesidades de las grandes mayorías dominadas y explotadas hasta entonces por el orden anterior. Sólo la revolución será capaz de imponer el nuevo orden social cuya meta está en la construcción de una sociedad sin clases. La democracia será posible hasta después y se niega la posibilidad de la transformación pactada en principio. El fin se impone sobre el medio político, también en la *tendencia revolucionaria*. Únicamente en la segunda orientación o *tendencia transformadora*, se da la coincidencia de instrumento y objetivo político, garantizándose así el régimen democrático per se. Pero, ¿están involucradas en esta orientación las fuerzas sociales más potentes del país? Parece ser poco probable, viendo que los sectores evidentemente mejor organizados pertenecen a los gremios empresariales y profesionales, a la institución armada y a la guerrilla, sectores todos que históricamente han estado comprometidos con las tendencias conservadora o revolucionaria. Además, la influencia de los sectores conservadores dominantes sobre la sociedad guatemalteca en los últimos treinta años, produjo el efecto tanto de radicalización y sectarización como de debilitamiento y dispersión de las demás fuerzas sociales. La organización del sector laboral fue destruida sistemáticamente. Las organizaciones políticas perdieron su fuerza representativa y legitimadora. La iglesia y la universidad se sectarizaron. Los medios de comunicación social perdieron su poder al no cumplir con su función de información objetiva. De esta manera, la tendencia transformadora que se nutre esencialmente del pacto y la negociación entre todas las fuerzas sociales de un sistema, progresivamente ha sido desechada como opción viable de la conducta política; y se trató de presentar como la única alternativa política, la vía autoritaria de conservar o revolucionar el orden social que coexiste desde hace treinta años en Guatemala.

Sin embargo, el ejercicio del poder por parte de los sectores dominantes en los últimos decenios, combinado con las condiciones recientes de política y economía internacional, ha conducido al país a una creciente crisis generalizada que pone en peligro su existencia misma. Influencias externas y reacciones internas se están conjugando de tal modo que, en la actual coyuntura, un régimen democrático eventualmente tiene oportunidad de obtener los apoyos suficientes con que instaurarse. El orden existente demuestra ser progresivamente insatisfactorio aun para cubrir las necesidades mínimas de la mayoría de la población guatemalteca, como señala claramente el Plan Nacional de Desarrollo 1984-1985 como documento oficial de gobierno. El desarrollo económico, social y político de Guatemala padece de deficiencias estructurales que tienen sus raíces en la Época Colonial. Ha sido orientado tanto por intereses internos como externos sectarios y malos manejos de la cosa pública hacia un franco deterioro, que culmina en la actual crisis generalizada, según el análisis que hace el Informe de la Comisión Nacional Bipartita sobre Centroamérica (Informe Kissinger) en 1984. La transformación del orden actual se

impone aparentemente como una necesidad histórica frente a la tendencia conservadora. Pero, ¿será una transformación paulatina y pactada o tendrá un desenlace violento y autoritario?

¿Será que Guatemala, como todo país centroamericano, ha estado inmerso en un proceso de desarrollo capitalista que arranca desde que era una colonia española? Se trata de un régimen económico, político y social inducido desde el exterior, dirigido en su desarrollo por fuerzas e intereses ubicados en países afectos al proceso de La Revolución Industrial, que económica y políticamente ejercieron influencia sobre la región. Se produce un capitalismo dependiente, desorganizado e incoherente que tiene por efecto el fenómeno del subdesarrollo, la dependencia y la marginalidad de los países respectivos. A la par se instalaron sobre estructuras remanentes coloniales y semicapitalistas, instituciones y regímenes políticos basados en un constitucionalismo formal. Estos regímenes se orientaron igualmente en modelos políticos foráneos que crecieron a partir de un diferente desarrollo histórico y contorno económico y social. Aquí en la ex-colonia, la democracia es la fachada proclamada que esconde un régimen autoritario y elitista, en que el poder real se mantuvo en pocas manos de grupos privilegiados.

La posibilidad de un régimen democrático constitucional, auténtico en el sentido que le hemos dado, como sistema político para Guatemala, se ha discutido aquí en el presente siglo, una y otra vez, al igual que en América Latina en general. La discusión sobre tal posibilidad toma un nuevo auge en los últimos decenios y se implanta con vigor hoy en día. La instalación de regímenes democráticos liberales se ve de repente como una necesidad frente a otras opciones políticas, inspiradas en un proyecto diferente al desarrollo capitalista. A estos países, que supuestamente se encuentran en vías de desarrollo bajo un signo capitalista occidental y que se caracterizan por la incongruencia y la debilidad de sus estructuras sociales, se presenta la alternativa socialista impulsada también desde afuera, como una posible solución de sus problemas internos.

Hay dos alternativas diferentes de desarrollo, promovidas por dos poderes hegemónicos del mundo actual y opuestos entre sí, ejercen influencia en el área "subdesarrollada". La dominación del Tercer Mundo está en juego y en este momento crucial, el modelo político de la democracia constitucional recobra una importancia nueva. Los países desarrollados de occidente y, en especial, Estados Unidos de Norteamérica, impulsan el modelo democrático como instrumento adecuado para la solución de la crisis general que afecta específicamente América Central: La democracia constitucional se presenta como un baluarte frente a la amenaza socialista, después de que los regímenes autoritarios han fracasado en producir el desarrollo necesario para una paz social y su consiguiente estabilidad política. Veamos las razones tanto teóricas como históricas que provocan ese desenlace.

LOS REGIMENES POLITICOS EN EL SISTEMA CAPITALISTA

Todo régimen político se caracteriza por ser una relación de dominación. Dentro del sistema capitalista, se han desarrollado y se siguen desarrollando formas de Estado y regímenes políticos de naturaleza

cualitativamente distinta entre sí, con respecto al dominio que ejercen. En el marco capitalista, de acuerdo con diferentes condicionamientos históricos y sociales, se han dado: la monarquía absolutista, la monarquía constitucional, la democracia constitucional, ya sea de régimen liberal o intervencionista, así como los regímenes dictatoriales, como fascismo y la dictadura militar. Es decir, se han producido regímenes tanto liberales como autoritarios en su seno. Analizaremos porqué, cómo, y cuándo aparece una y otra forma de gobernar para mantener y reproducir las condiciones de un orden social, base de su persistencia, ya sea bajo la libertad y el pluralismo, ya sea bajo el totalitarismo y la dictadura, dentro de un mismo sistema económico.

CONDICIONES DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL

La democracia constitucional se entiende como un régimen político que ejerce su dominación dentro de estructuras de la economía capitalista, primordialmente mediante el convencimiento, la negociación y el acuerdo entre los diferentes sectores sociales. El Estado tiene una función fundamental de intermediar entre los diferentes intereses sectoriales y promover proyectos políticos enmarcados dentro del interés nacional que obtengan el apoyo mayoritario de la población. El bien común es el fin declarado de la democracia constitucional, aunque los diferentes sectores organizados en grupos de presión traten de inclinar la orientación de dicho bien común hacia la consecución de sus propios intereses. A pesar de tratarse de una sociedad dividida en clases y estratificada de acuerdo con diferentes principios, el Estado Democrático pretende representar los intereses de toda la sociedad que se convierte en la nación. Para ello se dan las instituciones políticas de la democracia representativa como expresión de la voluntad y soberanía popular (sufragio universal, elecciones libres y pluralistas, supremacía del derecho, partidos políticos, separación de poderes y otros). Dichas instituciones proporcionan al Estado su legitimidad que es el eje sobre el cual gira la dominación democrática, mientras que la represión física y la coerción se convierten en instrumentos subordinados, de aplicación excepcional.

La viabilidad de un régimen democrático constitucional depende primordialmente de que el Estado, como tal, obtenga una determinada autonomía frente a los intereses económicos parciales de los sectores dominantes, organizados en grupos de presión. De esta manera, el Estado debe tener la capacidad de pedir e imponer los sacrificios necesarios, en especial a las fuerzas sociales que constituyen el poder económico, en beneficio del sistema total. Tendrán hegemonía aquellas fuerzas sociales que, siendo dominantes en el sistema, adquieran la suficiente distancia frente a sus intereses económicos directos para poderlos subordinar a sus intereses políticos. Dichos intereses políticos engloban a la sociedad total, tomando en cuenta también los intereses y demandas de las fuerzas sociales contrarias. Quiere decir que el saber negociar y pactar entre las distintas fuerzas sociales que son ópuestas entre sí y que se encuentran en una situación de superioridad o de subordinación relativa, constituye el poder político democrático. El arte de construir un régimen democrático constitucional, parece estar basado en el constante establecimiento de un

equilibrio inestable de compromisos.

En este contexto, los partidos políticos tienen la tarea fundamental de servir de instrumentos para convertir los intereses económicos de los sectores que representan, en intereses políticos, tomando en consideración la sociedad global, bajo un enfoque ideológico específico. A través de la ideología partidista respectiva, las fuerzas sociales deben encontrar sus proyectos políticos propios, en que sus intereses estén enmarcados en una visión general de la sociedad a que pertenecen. El juego democrático consiste en la posibilidad de construir en forma competitiva diferentes proyectos políticos que recogen de manera coherente las aspiraciones, costumbres e intereses de diversos sectores de la sociedad a la vez, de modo que éstos puedan identificarse con ellos. La lucha política a nivel de partidos apunta hacia la adhesión mayoritaria de la población al proyecto propio de cada partido. El partido que sepa aglutinar, en un proceso electoral, las proyecciones mayoritarias de la población por encima de la sectorización de intereses directos de los grupos, obtiene la legitimación democrática para gobernar. Sin embargo, es evidente que los partidos como tales actúan en el nivel de la representación de las fuerzas vivas de la sociedad. Dependen, en este sentido, de la voluntad y del entendimiento de los sectores organizados en grupos de presión que constituyen el mayor poder social del sistema. Si la sectorización del poder social no permite el establecimiento de varios proyectos globalizantes que involucren hasta cierto punto también las aspiraciones de los sectores contrapuestos a sus intereses, el acuerdo democrático se hace imposible. Los partidos pierden su función mediadora y se convierten en la cáscara vacía de los grupos de presión. Pierden su fuerza legitimadora de trasponer poder social sectorial en poder político unificador. Y el o los sectores dominantes gobernarán la sociedad directamente, aunque sea mediante una representación formal de fachada democrática. El régimen así, pierde su esencia democrática.

De esta manera, el correcto funcionamiento del régimen democrático depende de la capacidad política de los sectores dominantes, de pactar y negociar con los demás sectores de la sociedad a través de canales institucionalizados y de acuerdo con reglas establecidas, buscando siempre de nuevo el pacto social. La persistencia del dominio por parte de un sector social en un régimen democrático, está en función directa de su disposición de sacrificar parte de sus intereses directos para satisfacer las demandas urgentes de otros sectores. Naturalmente, el sacrificio respectivo siempre se dará por la presión y fuerza de los sectores no dominantes que hace necesaria la búsqueda de un nuevo equilibrio de compromisos. Es esencial que este nuevo equilibrio se busque dentro del sistema de reglas establecidas que es el Estado de Derecho.

Para lograr este tipo de pacto negociado, se hace necesario que los sectores dominantes se pongan de acuerdo sobre sus intereses básicos, —que es el mantenimiento de las condiciones generales del sistema económico capitalista—, y que uno de estos sectores logre la dirección unificadora sobre los demás, con lo que se convierte en la fuerza hegemónica del sistema. Adquirir hegemonía significa en este sentido, saber sacrificar los intereses propios de corto plazo que son casi siempre económicos, para constituirlos en intereses políticos de largo plazo.

Mediante este tipo de sacrificios se legitima ideológicamente una dominación política, tanto para los demás sectores dominantes como a los ojos de los sectores dominados. Por lo tanto, la dominación legítima necesita aplicar la coerción sólo de manera secundaria para garantizar el orden establecido, dándose como regla general que a mayor legitimidad, menor represión.

Hay que recordar que en toda sociedad, el poder político es acaparado por las élites sociales respectivas, que pueden ser de tipo económico, religioso, militar, técnico-intelectual; de acuerdo con las condiciones de cada sociedad y los valores que predominan en ella. Son las élites las que toman las decisiones políticas globales para el destino de los pueblos, aunque para ello tengan en cuenta las demandas de la sociedad global. Los gobiernos y los partidos políticos del régimen democrático se sitúan en la escena visible del sistema. Allí figuran como los representantes de los actores reales. Sin embargo, esta realidad poco se hace sentir, lo que constituye uno de los secretos legitimadores del sistema de dominación. El proceso de legitimación democrática provoca la creencia generalizada que los representantes son los responsables de los asuntos políticos, aunque el fondo de las cosas comúnmente es otro.

Por otro lado, el régimen democrático está inmerso en el dinamismo de la economía capitalista, por lo que obedece también a los cambios que en ésta se producen. Las élites dominantes igualmente cambian con el desarrollo del capitalismo, dándose conflictos entre élites antiguas y las nuevas élites emergentes, lo que genera una crisis de hegemonía en el sistema de dominación. Es allí donde parecieran surgir los regímenes dictatoriales en el sistema económico capitalista, dependiendo también de la etapa de su desarrollo y las circunstancias históricas si el régimen desemboca en una dictadura fascista, un régimen militar o bien un régimen dictatorial que guarda una fachada democrática.

CONDICIONES DE LOS REGIMENES DICTATORIALES CONSERVADORES

Estos regímenes aparecen primordialmente por la incapacidad de las élites dominantes de ponerse de acuerdo entre sí y su incapacidad de erigirse una de ellas en hegemónica o mantener su anterior hegemonía. Quiere decir que falta la fuerza directriz que unifique no sólo a los sectores dominantes mediante su sacrificio de intereses económicos, sino también a los sectores dominados. Cuando no hay acuerdo fundamental entre las élites dominantes, no se pueden establecer alianzas estables entre ellas y cambian también los acuerdos entre sus representantes, los partidos políticos. La crisis de los actores sociales, comúnmente también conduce a una crisis de representación. El conflicto entre las élites y la ausencia de una dirección hegemónica en las decisiones políticas globales crea inestabilidad y crisis que se hace sentir frente a toda la sociedad. El sistema pierde credibilidad y con ello fuerza legitimadora. Los intereses sectoriales predominan y se hacen evidentes. Se descubre a los actores reales del juego político. Las instituciones democráticas se vuelven insuficientes para garantizar la persistencia del sistema.

El desacuerdo profundo entre las élites dominantes de un país se

produce fundamentalmente o bien por la introducción de un nuevo sector, o bien por el desplazamiento del sector hegemónico antiguo por otro distinto. Este desplazamiento obedece a cambios que sufre el sistema de dominación por efecto del dinamismo de la economía capitalista. Los avances tecnológicos, el progreso económico así como el desarrollo del sistema capitalista internacional ejercen influencia sobre los regímenes políticos que se mueven dentro de su ámbito. Aunque el sistema económico interno de un país debe mantenerse en esencia, necesita modernizarse, introducir variaciones que favorecen el progreso. Dicha modernización que se impone al sistema económico, es promovida por un sector de la sociedad que emerge como una nueva fuerza social, una nueva élite. Sus intereses se contraponen a los intereses de las élites tradicionales hegemónicas hasta entonces. Interesadas en el mantenimiento de las viejas estructuras económicas que son la base de su poder, las élites tradicionales se oponen a la modernización. Incapaces de conservar su posición hegemónica dentro *del sector dominante, ellas obstruyen, sin embargo, el logro de hegemonía* de la nueva élite. Se derrumba consiguientemente la dirección hegemónica del régimen político, fundamental en el ejercicio de la democracia, y se hace imposible la circulación normada de élites en el ejercicio del poder a través del sufragio y los partidos políticos.

El conflicto entre las élites toma tal dimensión, que el Estado Democrático que es manejado por representantes institucionales y legítimos que corresponden al equilibrio antiguo de fuerzas, no se ajusta a la nueva realidad. El sistema de dominación representativa pierde su sentido, y la falta de legitimidad requiere de una mayor dosis de coerción para guardar el orden. El aparato estatal interviene de manera no institucional. Se rompe el orden constitucional pactado. El Estado de Derecho se convierte en régimen de facto y se instaura a una rama hasta entonces subordinada de la administración pública en la cúspide visible del Estado. A nivel latinoamericano, son primordialmente los ejércitos que se convierten en órganos dominantes dentro del régimen de facto. Como no hay una legitimidad que pueda justificar en sí estos cambios bruscos, la dominación ideológica pierde su fuerza acostumbrada y es sustituida de manera considerable por la represión física. En lugar del consenso, domina la amenaza. La obediencia es conseguida muchas veces mediante el terror.

Los regímenes de facto aparecen por lo tanto, como sistemas de dominación de emergencia o de excepción que encuentran su justificación en la suposición de que van a salvar el orden social general, amenazado por la falta de hegemonía entre las fuerzas sociales dominantes. Estarían presentes hasta que en el seno de la sociedad se haya establecido un nuevo equilibrio entre las élites, acorde con el desarrollo económico-social del sistema a que pertenecen. Tendrían vigencia únicamente hasta que una nueva hegemonía se imponga entre las élites, capaz de unificar a los sectores tanto dominantes como dominados; una élite con visión política que sepa adherir sus intereses a un proyecto ideológico globalizante, capaz de construir una sociedad dinámica que genere los satisfactores suficientes para todos sus integrantes. Entonces habría un nuevo momento para una transición hacia la democracia constitucional... ¡Así la teoría!

Sin embargo, debemos examinar en forma más directa las dictaduras militares o regímenes de facto con ciertas fachadas democráticas que de hecho se han dado en el ámbito latinoamericano para poder juzgar con más realismo la viabilidad de un modelo democrático para la Guatemala de hoy.

ALGUNOS RASGOS DEL NUEVO REGIMEN MILITAR EN AMERICA LATINA

Como marco general del desarrollo político en Latinoamérica, debemos señalar un estado de subdesarrollo y dependencia dentro del sistema internacional de economía capitalista. Se trata de economías dependientes que se encuentran bajo la influencia más o menos directa del gran capital internacional, las compañías multinacionales y los regímenes políticos correspondientes que impulsan la penetración de éstas en sus mercados. Mientras que tradicionalmente muchos de los países latinoamericanos estaban conectados principalmente con el gran sistema económico internacional mediante la agro-exportación, manejada sólo en parte por el capital extranjero, las compañías transnacionales se han interesado progresivamente en las economías latinoamericanas después de la Segunda Guerra Mundial. Se provoca una mayor internacionalización de los mercados latinoamericanos en contra de los intereses del capital doméstico, produciéndose fuertes enfrentamientos entre las élites nacionales tradicionales y las modernas élites comprometidas con los intereses multinacionales que financian e invierten en la explotación de recursos minerales, la nueva industria y el gran comercio, entre otros. Las élites nacionales comúnmente son desplazadas como fuerza hegemónica, a pesar de su protesta. Y las nuevas élites internacionalistas tratan de imponer su predominio a la fuerza, por medio del régimen militar como regla general, ya que no pueden conseguir el acuerdo necesario a nivel de los sectores dominantes. Por otro lado, necesitan de un Estado fuerte que detenga de cualquier manera las demandas populares que, como subproducto de los esfuerzos de modernización, se hacen sentir cada vez más, llamando a la subversión del orden existente.

Sin embargo, la dictadura militar, que como régimen de emergencia a nivel latinoamericano es llamada a conservar el orden general y preparar la instalación de una nueva hegemonía dentro de las élites dominantes, adquiere características propias. Se trata de un régimen que tiene a su disposición cada vez mayores recursos económicos y de represión para resolver la crisis y que, por otro lado, invade áreas de dominio dentro de la administración pública y fuera de ella, a las que tradicionalmente, como instituciones armadas, no habían tenido acceso. En la burocracia estatal encuentran un aparato que controla una importante parte de la riqueza nacional y cuyos puestos estratégicos son ocupados por oficiales militares. Esta tendencia crea problemas de intereses particulares que se desarrollan en el seno de los nuevos grupos que controlan la administración pública.

Estas últimas observaciones son las que crean el vínculo inmediato con el caso de la crisis política en el Estado guatemalteco.

CRISIS POLITICA Y REGIMEN MILITAR EN GUATEMALA

La democracia constitucional que se instaló mediante la Revolución de Octubre de 1944 en Guatemala, puede ser interpretada como un intento de modernización del régimen socio-político, de acuerdo con las necesidades internas y las influencias generadas por el desarrollo de las relaciones internacionales a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se trató de un intento de reformar el país por la vía democrática, en el marco de un Estado de Derecho y pluralismo político. Entre otras cosas la paulatina eliminación de los latifundios, la creación de una amplia capa de pequeños propietarios rurales, así como un mercado interno para poder inducir un desarrollo industrial. Las capas medias urbanas proporcionaron el personal de la administración pública y se fomentó la organización popular. El poder económico, sin embargo, se quedó en manos de los terratenientes agro-exportadores. Por otro lado, el objetivo de desarrollar un capitalismo nacional fue adverso a los intereses del gran capital internacional, lo que creó conflictos al nuevo régimen.

Este régimen que surgió de la Revolución de 1944, se ajustó al tipo de régimen democrático constitucional que se ha descrito anteriormente. Fue de carácter nacionalista y reformista y expresó una especie de populismo, estando presentes también varios partidos representantes de las capas medias que buscaron consolidar una alianza con el incipiente sector industrial y productor de bienes no tradicionales. El Estado funcionó como órgano de mediación, buscó englobar los intereses de diferentes sectores sociales que participaron en el proyecto populista: empresarios, pequeños propietarios, empleados públicos y privados, trabajadores, estudiantes, profesionales y maestros. Logró producir un nivel de consenso nunca antes alcanzado entre la población. También, por nutrirse la burocracia estatal de los mismos sectores medios comprometidos con el proyecto democrático populista, el régimen adquirió una suficiente autonomía frente a los grupos de presión del poder económico. Sin embargo, el proyecto fracasó por causas históricas tanto internas como externas. A nivel interno, en el segundo gobierno de la Revolución presidido por el Coronel Jacobo Arbenz, se desarrolló paralelamente un proyecto político alternativo que se orientaba en el socialismo y que agudizó los conflictos sociales destruyendo la alianza de clases. Dicho proyecto alternativo igualmente produjo temores a nivel externo, en el que la guerra fría estaba presente. Además, en esa época, las relaciones exteriores de Estados Unidos de Norteamérica hacia América Latina son aprovechadas primordialmente para salvaguardar los intereses económicos de sus compañías transnacionales. De esta manera, se unieron tanto poderosos intereses sectoriales internos como externos, para dar el golpe al proyecto democrático que quedó concluido definitivamente a los diez años de haberse iniciado, con la invasión de Castillo Armas en 1954. Aunque el ejército había jugado un papel importante para la instauración del gobierno de la Revolución mediante sus oficiales jóvenes, otros oficiales cooperaron con la caída del régimen constitucional.

Se inició la llamada Epoca de la Liberación, que no sólo da al traste con los gobiernos de la Revolución, sino que causa profundos daños al proyecto democrático constitucional. Como modelo político de domina-

ción que procuraba la transformación pacífica de la sociedad mediante la obtención del consenso, la democracia quedó desvirtuada y desautorizada. Dicho consenso no se ha podido obtener más de allí en adelante, por lo que el régimen perdió credibilidad y legitimidad a pesar de sus intentos constitucionalistas que le sirvieron de fachada democrática. La dominación desde entonces se mantuvo principalmente mediante los instrumentos de represión en poder del Estado. Los cuerpos de seguridad, se convirtieron en las partes decisivas del régimen. En cambio, las instituciones de mediación democrática fueron clausuradas como mecanismos eficaces de legitimación estatal e instrumentalizadas mayoritariamente por los sectores dominantes. La organización popular fue destruida sistemáticamente y se mediatizó la representación política de los grandes sectores populares. El espacio político fue ocupado casi exclusivamente por partidos débiles, entregados a las élites dominantes. A la vez sustituyó el proyecto de desarrollo enmarcado en una economía capitalista nacional por un proyecto vinculado con los intereses transnacionales. En este contexto nació el Mercado Común Centroamericano con un desarrollo industrial financiado desde el exterior. Era el intento de modernización del sistema económico, social y político bajo un signo distinto: impopular, autoritario e internacionalista.

Aquí se sitúa el tipo de régimen político que ha ejercido la dominación en Guatemala hasta ahora, un régimen autoritario y muchas veces dictatorial que por intervalos actuó bajo una frágil fachada democrática y por otros bajo la dictadura directa: "El Estado Militar", como lo llaman algunos autores latinoamericanos. Aparte de intereses foráneos, lo provocó hasta cierto punto un conflicto social que amenazaba la existencia del sistema. Implicó el macrodesarrollo de la represión institucional y produjo un proceso de militarización en Guatemala que ha tenido tres efectos: una influencia decisiva militar sobre la política estatal; el paso de militares de alto rango a la élite dominante y, finalmente, la extensión de las actividades de la institución militar hacia otras ramas de la administración pública y hacia el campo de acción de la sociedad civil.

Este Estado nació como todo tipo de régimen de excepción, teóricamente descrito. Se practicó la dictadura en vez de una hegemonía de las élites sociales y la coerción en vez del consenso, teniendo el objetivo aparente de lograr así un nuevo equilibrio social y una nueva hegemonía entre el sector dominante. Pero las fuerzas armadas encargadas de velar transitoriamente por el orden social, sufrieron en esta misión un traslape de diferentes estructuras y funciones que provocó un desenlace divergente de lo previsto en teoría. Por un lado, los oficiales del ejército que provienen de sectores sociales medios, formaron parte de la burocracia del Estado y se convirtieron en funcionarios medios de la administración civil. Los militares de alto nivel pasaron a ser parte de la élite dominante en el ejercicio de sus cargos combinados de mando militar y alto funcionario de gobierno. Los diferentes roles asumidos provocaron intereses distintos entre los miembros del ejército. Sin embargo, parece haber prevalecido por autoridad jerárquica involucrada, el proyecto de los militares de alto nivel, que supuestamente pretendía penetrar y dominar la sociedad civil en los diferentes campos de acción, convertir al ejército en una fuerza social

autónoma y convertirse ellos mismos en élite social.

Bajo estos signos, el proyecto de militarización promovido por la cúpula en el poder desde los años sesenta, se propuso asumir la dirección hegemónica de la sociedad y dejar de ser el instrumento de las élites civiles. Fomentando su propio espíritu de cuerpo el ejército creó sus instituciones de apoyo: un instituto de previsión militar, una banca y aseguradora y su canal de televisión, entre otras. Se proyectó establecer una universidad militar y, mientras no se tenía, gran cantidad de oficiales se formaron paralelamente en las universidades civiles para asumir posteriormente los puestos estratégicos de la administración pública. De esta manera una rama de la actividad estatal adquirió autonomía frente a las demás instituciones del Estado así como frente a la sociedad civil. Por otro lado, se trató de dar una cierta relegitimación democrática a la época enmarcada entre 1966 y 1974, bajo la estricta vigilancia militar; una especie de democracia otorgada.

Sin embargo, entraron en acción en la misma época, las compañías multinacionales que penetraron la industria, el comercio, el petróleo y el níquel en los años setenta. Algunos oficiales de alta jerarquía, ya pertenecían a los sectores vinculados con dichas compañías. Desde entonces diversas políticas estatales y proyectos de infraestructura estuvieron en función del interés sectorial de esas élites. Así, la Franja Transversal del Norte, algunas grandes carreteras, el proyecto del Periférico Nacional, un puerto en el Océano Pacífico, hidroeléctricas y un nuevo aeropuerto a construirse fuera de la capital. Los beneficios de estas inversiones se dirigieron a las nuevas élites, otros sectores dominantes y algunas capas medias urbanas y rurales. Sin embargo, el costo social del crecimiento y los efectos de la inflación municipal empezó a recaer sobre los sectores populares y parte de los sectores medios. Prevaleció el interés sectorial en forma desmedida sobre el interés nacional, ya que la cúpula del poder estatal que se encontraba en manos de militares de alto rango, estaba intrínsecamente comprometida con los intereses económicos particulares de las élites a las que habían ascendido. Por la magnitud de los proyectos de infraestructura que el gobierno emprendió, se produjo una estatización parcial de la economía. Por otro lado, se constituyeron relaciones de competencia entre sociedad civil y la sociedad militar. La estructura de dominación se corrompió profundamente y obstruyó la transferencia normada de la dirección política hacia un régimen democrático. Desde 1974 se institucionalizó el fraude electoral, y el mando del gobierno fue transferido únicamente hacia los candidatos oficiales, militares todos, escogidos de antemano por la cúpula en el poder.

A la par de todo este proceso e influenciado por él, empiezan a darse desde 1960 movimientos sociales que desembocaron parcialmente en la acción guerrillera, con su primer auge y declive, resurgimiento y nuevo repliegue ante la persecución y el contraataque del ejército. La actividad guerrillera, por su parte, nutrió el proyecto militar. La seguridad nacional interna se convirtió en el primer objetivo del Estado y el ejército parecía ser el único capaz de frenar la subversión y mantener el orden. Proporcionó la justificación interna a la cúpula militar de no entregar el mando del gobierno a civiles, considerados de antemano demasiado débiles para

enfrentar la situación bélica de la nación. La represión se impuso cada vez más como el principal instrumento de dominio.

Con los efectos de la recesión económica mundial desde finales de los años setenta, así como por la inestabilidad política, social y económica provocada por la actividad guerrillera a nivel nacional y centroamericano y la corrupción generalizada en la administración pública; el sistema entró en una profunda crisis que se manifiesta a diferentes niveles: fuga de capitales, endeudamiento público, especulación, inflación y devaluación de la moneda nacional no oficializada, así como un rápido aumento en la tasa de desempleo y una progresiva insatisfacción de las necesidades básicas de las grandes mayorías de la población. Por otro lado se produjo un creciente descontento general, especialmente en los sectores dominados, frente a la mala administración de la cosa pública y a la inseguridad física que se sentía en el país. La represión como instrumento de dominación no bastaba como mecanismo fundamental de dominación, ya que el hambre, la desesperación y la costumbre, a la larga hacían inefectivas las medidas respectivas. De todos los males se inculcó de ser los responsables a los militares. Cuando se produjo el último fraude electoral en 1982, el vaso estaba colmado y los mandos medios del ejército se proyectaron hacia el rescate de la institución armada y de la nación en sí. Dieron el golpe de Estado al régimen del General Lucas García, poniendo al mando del gobierno al General Ríos Montt quien había sido víctima él mismo del fraude electoral ejercido por la cúpula en el poder en 1974.

Cabe preguntarse cuál ha sido el objetivo último de esta acción de los comandantes del ejército de Guatemala. Al tratar de captar los efectos del régimen militar en Guatemala, se debe distinguir fundamentalmente entre los *actos de gobierno* conducidos por militares y los *actos militares* propiamente dichos. Mientras que los militares guatemaltecos obtuvieron logros considerables al actuar como institución armada en el combate de la lucha guerrillera, los fracasos a nivel político general han sido evidentes. Igualmente se hace evidente que dichos fracasos obedecieron en el fondo, al manejo sectorial de los asuntos nacionales bajo el mando político del régimen militar. Aparentemente, el golpe de Estado de marzo de 1982 ha sido en primer lugar un intento de reorientar el proyecto político militar hacia sus objetivos iniciales: constituir la institución armada en una fuerza política nacional y unificadora que combine su eficiente acción militar con una correcta conducción política de la sociedad civil débil y desorganizada. "El ejército salva a su pueblo", parece haber sido el lema que el General Ríos Montt adoptara en su papel de Jefe de Estado. En cambio, el proceso de apertura democrática que se inició seguidamente, más bien debe haber obtenido un segundo lugar en el establecimiento de las metas. De las declaraciones de Ríos Montt, de optar por el título de "Presidente" y la legislación promulgada en su época (Estatuto Fundamental de Gobierno y las Leyes electorales), se desprende la voluntad de iniciar el orden, la paz y el desarrollo, de manera autoritaria, desde la cúpula, antes de pensar en entregar el gobierno a un posible equipo civil. Para ello, se necesitaba tiempo para quedarse al mando del proceso, especialmente para cambiar también la moral del pueblo. Evidentemente empujado por la presión interna y externa, Ríos Montt hablaba mucho de la apertura democrática,

pero hacía sentir más, su profundo desprecio hacia las organizaciones políticas existentes y futuras de Guatemala y sus representantes, a quienes llamaba los "politiqueros". Contrariamente a la proclamada apertura democrática, se profundizó el proceso de militarización de la sociedad civil durante el gobierno de Ríos Montt, mediante dos acciones: la organización de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) como instrumento para combatir la guerrilla, y el establecimiento de las llamadas Coordinadoras Interinstitucionales, cuya conducción fue arrebatada a los Gobernadores Departamentales y otorgada a los comandantes militares, poniendo así en manos del ejército, la dirección y vigilancia del proceso de desarrollo nacional en sus diferentes niveles. Si Ríos Montt y sus asesores militares jóvenes pensaban entregar más adelante, no sólo el mando formal, sino también transferir el mando político efectivo a un gobierno civil electo, nos quedará de eterna duda.

Cuando en agosto de 1983 se dio el llamado "recambio" mediante el cual se sustituyó al General Ríos Montt por su Ministro de Defensa, el también General Mejía Victores, se impone la misma inquietud: ¿Cuál fue el objetivo último del recambio y sus efectos? Evidentemente se produjo dentro de la institución armada una lucha en que ganaron las fuerzas opuestas al proyecto político promovido por Ríos Montt. También se notó desde este cambio, en la Jefatura de Estado, un mayor afán de acelerar el proceso democratizador, mediante un cronograma exacto para la elección a la Asamblea Constituyente que efectivamente tiene lugar bajo completa libertad en julio de 1984. Del mismo modo se ha proyectado la actuación gubernamental en cuanto a las elecciones generales a realizarse a finales del presente año de 1985.

A la vez, se ha percibido la constante presión desde el ámbito internacional, especialmente de Estados Unidos de Norteamérica, para que la democratización siga su paso. Esto tiene tanto más importancia en cuanto, durante la administración del General Mejía Victores, se ha dado un pronunciado deterioro de las condiciones económicas y un alarmante crecimiento de la delincuencia común provocada primordialmente por el desempleo, la miseria y el hambre. Se produjeron disturbios sociales, nuevas actividades guerrilleras así como desapariciones de personas y secuestros. En lo general, este último gobierno se caracterizó por una gran incapacidad de resolver los problemas nacionales urgentes, cuya solución, aparentemente, se ha querido dejar a la presunta democracia naciente, legitimada por el voto popular. Igualmente, se ha demostrado una debilidad preocupante del régimen de facto frente al poder económico civil organizado en Cámaras. En abril de 1985, el gobierno se vio forzado a echar marcha atrás con un proyecto urgente de reforma fiscal. De allí en adelante se acentuó todavía más la tendencia percibida de querer entregar a la mayor brevedad posible el mando del gobierno.

EL RETO DE LA VIABILIDAD DEMOCRÁTICA

Aún teniendo en cuenta estas últimas circunstancias, queda abierta la pregunta si realmente se pretende alcanzar un nuevo régimen auténticamente democrático y constitucional.

La coyuntura actual demuestra signos positivos en apariencia. El

occidente democrático promete proporcionar una ayuda masiva al proceso. Los sectores dominantes civiles de la sociedad guatemalteca concuerdan mayoritariamente en sus declaraciones, que debe concluir a la mayor brevedad posible el régimen militar. Ningún militar ha sido nominado candidato a Presidente o Vice-presidente de la República, lo que es una profunda novedad en la historia política de Guatemala. Un cuerpo independiente de Magistrados ha podido ejercer sus funciones de Tribunal Supremo Electoral en condiciones de total libertad. El pluralismo político se ha desarrollado satisfactoriamente, presentándose a la elección popular *ocho opciones políticas* con orientaciones ideológicas que varían desde una socialdemocracia, una democracia cristiana y, diferentes opciones centristas-liberales hasta la tendencia de los partidos de la derecha tradicional. La mayoría de estas opciones escriben sobre su bandera la transformación paulatina de la sociedad, como su meta política. La institución armada declara públicamente que se va a retirar de sus funciones de gobierno para dedicarse a las actividades que le son propias según la Constitución de la República. ¿Sucederá todo así realmente?

Haciendo caso omiso aún, de la regla general de que las democracias modernas raras veces se han desarrollado en condiciones económicas precarias, nos quedan suficientes dudas en cuanto a su posible desenvolvimiento de la democracia en Guatemala. Retomando las ideas iniciales del presente ensayo, en estos momentos en que el pueblo de Guatemala se apresta a concurrir a las elecciones generales, nos preguntamos nuevamente, ¿quiénes de las fuerzas sociales existentes —(y no sólo a nivel de la representación política)— realmente se han comprometido con la tendencia transformadora de la sociedad? El reto para la democracia naciente es múltiple: los sectores dominantes tradicionales deberán estar dispuestos a contribuir a un desarrollo que necesariamente les quitará parte de sus privilegios, aunque sea a través de una justa imposición fiscal. Los sectores económicamente poderosos deberán dejar de utilizar parte de su patrimonio para corromper a las nuevas autoridades, a pesar de su afán de seguir usufructuando de los mismos beneficios que han tenido hasta el momento. Las fuerzas armadas tendrán que hacer uso de su poder de coerción, únicamente cuando la Ley lo manda. Además, las demandas populares por pan, techo, trabajo y seguridad personal no se deberían desbordar, al percibir el pueblo que la represión ya no se quiere aplicar a quienes realicen demostraciones y manifestaciones. Sin embargo, nos preguntamos: ¿No van a paralizar fácilmente series de huelgas generales, la economía de por sí enferma del sistema? ¿Cómo se va a comportar el estudiantado sectarizado? ¿Qué oportunidad está dispuesto a ofrecer el movimiento guerrillero al intento democrático de modernización y transformación de la sociedad? Para una efectiva democracia será indispensable involucrar por lo menos parte de sus miembros dentro de un proceso pacífico de convivencia pactada.

Y siguiendo en el orden de nuestras ideas, nos cuestionamos de nuevo sobre las relaciones que actualmente se puedan haber establecido en el seno de las élites dominantes y las eventuales alianzas que sea posible lograr, entre ellas, y con respecto a los sectores no dominantes de la sociedad. Lo mismo nos preocupan las relaciones que se están formando

entre los sectores dominantes y sus representantes políticos, los partidos. Es urgente, en las actuales circunstancias, el establecimiento de un nuevo equilibrio entre las fuerzas sociales dominantes, después de que el proyecto político de los militares fracasó en querer instaurar una hegemonía de tipo diferente. Debe surgir entre las élites la necesaria previsión y prudencia política, que deje actuar a los representantes gobernantes con la suficiente autonomía para desarrollar proyectos políticos capaces de englobar a toda la sociedad y legitimar así el régimen democrático que se establezca. Sólo respetando las reglas del juego que constitucionalmente se han acordado, por encima de los intereses grupales y sectoriales, se podrá por lo menos, lograr la iniciación de un Estado de Derecho, en que la participación de la democracia activa se construya poco a poco. Sólo el tiempo se encargará de contestarnos, si la sociedad guatemalteca podrá encaminarse hacia una transformación paulatina y pactada, sin que se produzcan nuevos desenlaces violentos y autoritarios.

RESUMEN

En opinión de la autora, la instauración de una democracia constitucional como régimen de dominación legítima en una economía fundamentalmente capitalista, se ha convertido en un nuevo reto para la sociedad guatemalteca.* Enfrenta una profunda crisis en todas sus estructuras, después de que el intento serio de reformar por la vía democrática las condiciones socio-políticas del país, fuera abortado por un golpe de Estado en 1954. La modernización democrática rechazada entonces, provocó el surgimiento de regímenes autoritarios que se enmarcan todos dentro del llamado "Estado Militar". Dicho régimen supuestamente ayudaría a establecer por la fuerza un nuevo equilibrio social pactado entre los diferentes sectores dominantes. Dejaría de funcionar al no más haberse logrado la nueva hegemonía de una de las élites, capaz de unificar los intereses parcialmente opuestos entre sí, dentro de un proyecto político nacional. El sistema de dominación así adquiriría una nueva legitimidad haciendo innecesario el dominio autoritario mediante la represión. Sin embargo, en Guatemala el Estado Militar se autonomiza progresivamente. La institución armada construye su propio proyecto político intentando erigirse ella misma en la fuerza social hegemónica, bajo el mando de su alta jerarquía, los generales. Dicho proyecto fracasa a la larga, ya que las funciones de seguridad nacional propias del ejército, se traslapan con las demás funciones que la institución como tal y sus altos mandos por separado adquieren. El proyecto político pierde su enfoque global y la dominación de por sí legítima, se ejerce más y más en función de intereses sectoriales. Una notoria incapacidad administrativa acelera el deterioro general de las condiciones económicas y sociales. Por otro lado, se presenta a nivel nacional y centroamericano un proyecto alternativo de desarrollo de tipo socialista que es sentido como una amenaza por los sectores dominantes del sistema occidental. Estados Unidos de Norteamérica empieza a preocuparse por una nueva legitimación democrática de los subsistemas de dominación localizados en su periferia como una defensa ante el proyecto socialista. El resurgimiento de regímenes democráticos constitu-

cionales parece iniciarse en el área... ¿Será viable ahora la democracia en Guatemala?

2a. Exposición del enfoque político

Carlos Escobar Armas

La historia política de algunas de las más recientes experiencias, demuestra que el proceso de transición de un régimen autoritario a uno democrático, tiene un grado razonable de indeterminación y que la naturaleza de ese proceso es fuertemente influida por sus condiciones iniciales. Además, está implícito en las mencionadas experiencias que un régimen autoritario entra en un proceso de transición cuando existe de forma generalizada en los actores políticos relevantes, una deliberada intención de cambiar el régimen. En Latinoamérica se registran los casos siguientes:

Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Honduras, El Salvador, entre otros.

En Europa, es evidente el caso español y sus aciertos y desaciertos.

Las razones y las condiciones iniciales varían de caso a caso, en cada uno de los ejemplos. Para determinar con claridad el proceso de transición, es importante hacerse tres preguntas iniciales.

- a) ¿Transición de dónde y para dónde?
- b) ¿Quién inicia el proceso de transición, razones y objetivos que se tienen y cómo, y por qué y quién ejecuta la transición?
- c) ¿Quiénes deben sumarse y por qué?

La conjugación de las respuestas a estas preguntas, establece escenarios radicalmente distintos.

El caso de Guatemala, como el de España, Brasil o Argentina, es un caso de deliberada intención de los grupos gobernantes de promover la transición para la democracia, pero a pesar de ello es muy importante que tomemos en consideración las fuerzas sociales participantes, a manera de poder diferenciar dentro de la actual matriz autoritaria, cuales son los objetivos y los medios políticos que se emplean o emplearán para su logro y, la influencia que finalmente tendrán en la nueva realidad política. Es necesario en consecuencia, tener presente que el juego de posibilidades

* Después de darse una explicación teórica sobre las condiciones generales de la democracia y la aparición de regímenes autoritarios en el sistema capitalista, se describe como esta sociedad concreta.

de un proceso de transición es fuertemente influido por las condiciones iniciales del mismo, que marcan la viabilidad e inviabilidad de un proyecto democrático participativo y constitucional.

Si se entiende el proceso de transición para la democracia, como un juego de posibilidades políticas, se pueden establecer algunos condicionamientos empíricos que determinarán los márgenes de libertad de los diferentes actores cuyo objetivo es transformar la crisis actual hacia un nuevo orden social.

Schmitter (1979) nos dice "que para la transición de un régimen autoritario y su posible reposición por un régimen democrático, son dos procesos históricos distintos aunque obviamente superpuestos. En un momento dado (probablemente no concebido de antemano) la transformación de una determinada experiencia autoritaria se torna inevitable, entretanto que el prospecto de un resultado democrático no se torna por consiguiente inevitable".

Por lo tanto, la naturaleza de una experiencia autoritaria y las circunstancias de su mantenimiento o desintegración, afectan de hecho la viabilidad de una sucesión democrática en tanto no se determine el sentido de que ofrezcan una necesaria y suficiente explicación o predicción de su resultado. El período de transición tiene una dinámica propia de la cual surgirán los factores relevantes para la explicación o predicción del resultado.

En tanto el período de transición política tenga un grado mayor de indeterminación comparado con el período "rutinario" que lo precede, este grado de indeterminación no es suficientemente grande para anular cualquier tentativa de colapso del procedimiento.

La transición de un régimen autoritario para uno democrático puede ser ecuacionada así:

$$\left(\begin{array}{c} \text{Matriz Política} \\ \text{Autoritaria MPA} \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c} \text{Matriz Política} \\ \text{Transición MPT} \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c} \text{Matriz Política} \\ \text{Democrática MPD} \end{array} \right)$$

Por matriz política entendemos el conjunto de instituciones políticas (que forman la estructura institucional de un régimen, y por tanto son elementos estáticos) y las interrelaciones de simetría (que configuran las relaciones de poder, por tanto, la dinámica de vida política) entre esas instituciones que sirven para la clasificación de los regímenes.

La lógica de operación de ecuación de transición es simple.

Los elementos de la matriz política de transición (MPT) tienen por objetivo transformar los elementos de la matriz política autoritaria (MPA) de tal manera, que los correspondientes elementos de la matriz política democrática (MPD) se produzcan. Por lo tanto, queda claro que la solución de la ecuación de transición política depende de MPT. En tanto, la lógica de operación de esa ecuación política es simple, su solución no lo es. Desde el punto de vista de la filosofía política sabemos que la matriz política democrática no es la única. Las razones de permanencia o desintegración de un régimen autoritario no son por ellas mismas suficientes para tornar inevitable la emergencia de un régimen democrático.

En este proceso los límites de libertad de acción de los actores, en el juego de posibilidades de política son dados por los arreglos posibles que

se van haciendo o desapareciendo en cada hecho nuevo.

La transición del Estado A (autoritario) para el estado D (democrático) como John Elster (1978) sugiere, depende de que el Estado D sea Ex-Ante. Para huir del inmovilismo de los simples análisis de rutina política y asimismo de las teorías evolucionistas de cambio, Elster, sugiere que la transición de A para D, aunque éste sea considerado Ex-ante políticamente imposible, existe siempre un Estado intermedio T, que no es necesariamente único, el cual es políticamente ex-ante posible y podrá abrir camino para el Estado D que se pretende. No obstante es siempre posible que errores de cálculo de los actores puedan generar situaciones idiosincráticas sin solución. Aún así, las siguientes premisas también se aplican.

De un lado, el retorno a la matriz política autoritaria previa a una nueva versión es siempre una posibilidad real, y por otro lado, la realización de un tipo híbrido de democracia política es siempre también otra posibilidad real. En la medida en que el estado intermedio T (en nuestro caso la matriz de transición) no sea necesariamente único y que diferentes matrices de transición pueden generar democracias políticas distintas, se ve que el momento de transición (cuando el régimen autoritario previo está siendo liberalizado) es el momento político crucial para los diversos grupos y clases sociales. Es en ese momento que sectores sociales hasta entonces dormidos se levantan como grupos políticos planteando nuevas demandas sociales, nuevas aspiraciones. Es en este momento que el espacio político es reducido y se inicia por parte de los diferentes grupos políticos una lucha diaria por la reorganización de la sociedad de acuerdo a sus principios ideológicos.

Es sabido que diferentes formas de organización social y política atienden de manera diferenciada las demandas individuales y/o colectivas. Por tanto podemos anticipar los límites probabilísticos dentro de los cuales las soluciones para los diversos conflictos de intereses entenderán las demandas de diferentes grupos sociales. Esta posibilidad a priori, Pswonski (1978) dice que es dada por la manera como el conflicto político es organizado, institucionalizado y administrado.

Dentro de una distribución de los recursos económicos e ideológicos, la manera como los conflictos son organizados, determinan cuáles son los intereses, cuáles son los que probablemente serán atendidos, cuáles son improbables y más importante, la variedad de intereses que al final serán atendidos.

Las demandas sociales, los intereses individuales y colectivos no surgen de la nada y cuando surgen, no se encuentran vagando por sobre la sociedad a la espera de un lugar en la agenda pública de prioridades sociales. Los intereses específicos o colectivos, pasan a ser demandas política en el exacto momento en que ellas son expresadas. Los individuos o las instituciones que ellos crean o crearon sólo darán expresión política a los intereses demandados si se convierten en lo que Bolívar Lamounier (1979) llama "interlocutores válidos o representantes legítimos de aquellos intereses".

Desde el punto de vista de la dinámica del proceso de transición de regímenes, antes de que cualquier demanda social sustantiva obtenga ser destacada, es necesario que sea constituida una red de "interlocutores

válidos". El momento de transición de régimen puede ser visto entonces como un período de luchas políticas para institucionalizar el o los conflictos y para la definición y reorganización del sistema de representación política. Por tanto, la transición de regímenes implica una discusión de las distintas teorías de representación política para la organización democrática de la sociedad y sus consecuencias.

LA TRANSICION Y LA SUCESION PRESIDENCIAL

El panorama político 1982-83 puede ser descrito como un período de distensión y apertura política. Es a partir de las reformas legales e institucionales de 1983 que aparece el término democratización, para describir el momento político y no solamente la intención. Se instala un proceso, en el cual se trata de hacer política apartidista.

Lo que caracteriza este primer período puede sintetizarse así:

Alteración constitucional e institucional.

Aspecto liberalizante de la tensión política.

Reducción del aparato opresor y represivo.

Alteraciones autoritarias y poderes excepcionales.

Administración de la economía aún más centralizada a través de Decretos Ley.

Debate político sobre democratización.

En síntesis, liberalización del debate político, como una señal para iniciar el camino hacia la democracia. En Guatemala, este camino estuvo delimitado primero por el régimen de Ríos Montt y luego, por el régimen de Mejía Victores, que marcó el camino a donde se dirige, ¿cuál es su trayecto y a qué velocidad máxima es permitido circularlo? Al producirse el "relevo de poder" se inició el segundo período, cuyas características conforman otro modelo, que originalmente era el continuista democratizante ya que el gobierno hizo varios intentos de mantener institucionalizadas a las patrullas de autodefensa civil y las coordinadoras interinstitucionales.

Al propio tiempo el manejo de la crisis económica y financiera del país se mantiene como el marco o cuadro dentro del cual se concentra la acción guerrillera y los conflictos regionales centroamericanos que de uno u otro modo, determinan la capacidad de maniobra de los actores del proceso.

Un intento de diálogo nacional abierto entre el sector público y los sectores económica y financieramente responsables de la situación del país, los únicos más organizados y como tales mejores interlocutores y la ausencia de tal diálogo de una completa representación popular, ya que la representación sindical y cooperativa allí presente, limitada en todos sentidos, contaba con la participación de otros sectores en calidad de "expertos" pero sin ningún control sobre la ejecución de las decisiones.

La sucesión presidencial, que tuvo un interés prevaleciente, aun sobre la misma redacción de la Constitución, y lo sigue teniendo, al menos publicitariamente, se fundamenta en tres factores básicos:

- a) El proceso electoral que culminará con la elección presidencial.
- b) Los candidatos presidenciales surgidos hasta ahora en forma súbita por el consenso de los dirigentes partidarios sin mayor proceso democrático hacia el interior de los partidos, y
- c) La reacción de la opinión pública ante los dos primeros factores

Al cuadro anterior débese agregar la extraña "diarquía" que estamos viviendo, al contraponerse al sistema militar-burocrático aún dominante, una Asamblea Nacional Constituyente, formada por diputados electos directa y popularmente. Existen dos estructuras o bloques hegemónicos. En una, se da el poder y en la otra podría darse si la Asamblea Constituyente contará con la efectiva lealtad y fidelidad política de los partidos electores, que no se enfrentan al gobierno, desprovisto de partido oficial dominante, pero que cuenta con la fuerza armada y la indiferencia de sectores de población escépticos y otros marginados, la mayoría (como ha sido hasta ahora).

Quiere decir, que debemos tomar en consideración al llegar el momento de la constitucionalización de los poderes y con ella la instauración del proceso democratizador, que aún hay espacios abiertos en el proceso de apertura que no se han llenado y que los factores de estratificación política persisten.

Conviene en consecuencia, indagar dónde se encuentra el sistema político de Guatemala, dando a esta indagación el sentido prioritario de identificación de los factores de contención institucionalizada del proceso de apertura para lo cual resulta útil distinguir varios aspectos o niveles de análisis, todos de la mayor importancia en el esquema vigente de estratificación política del país:

1. La total subordinación formal y sustantiva del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, a pesar de encontrarse reunido y en plena deliberación de la Asamblea Nacional Constituyente.

2. La elección directa para Presidente y Diputados, con un Tribunal Supremo Electoral designado por órganos carentes de legitimidad, que hará la calificación y proclamación, conforme una ley específica emitida por el régimen de facto.

3. Total falta de control por parte de la ciudadanía, así como de la Asamblea Nacional Constituyente y de los sectores políticos organizados, sobre la política económica y financiera del país.

4. Ausencia de tutela del gobierno militar sobre el proceso político y reiteradas declaraciones de neutralidad política.

5. Pérdida sucesiva de control y de la capacidad del gobierno para ofrecer y dar una solución política-económica común a las emergencias nacionales.

6. La convicción que la mayoría del sector organizado sustenta, de que solamente por medio de elecciones democráticas se devolverá autoridad y credibilidad a la autoridad gubernamental, juntamente con una mejor posición para el enfrentamiento de los problemas de todo orden que afectan al país. La cuestión inquietante, y que debe indagarse lo suficiente acerca de ella es: ¿Tendremos o no en los próximos años un gobierno mínimamente consistente, capaz de llevar a la práctica una *propuesta política viable para enfrentar la crisis múltiples que vive el país?*

La respuesta a esta pregunta dependerá en gran parte del nivel de tensión social a que lleguemos y consecuentemente los costos de represión o alternativamente, los beneficios esperados de una estrategia fundada en la búsqueda de un apoyo popular para el proyecto de gobierno.

Dependerá también del grado de dificultad encontrado para armonizar

los intereses de las cámaras y las camarillas dominantes en torno de una estrategia económica consistente, cualquiera que ésta sea.

Esta sin duda es una de las variables a considerar en la cuestión de "retroceso político" versus "avance del proceso de democratización", y la definiríamos como las variables o factores internos que intervienen en el proceso de democratización, para contraponerlas con *las variables o factores externos* que más adelante señalaremos, ya que la perpetuación de las actuales contracciones económicas externas, que implican compromiso inaceptable de recetas de exportación y prolongación indefinida de la recesión, con seguridad llevará a dilemas extremadamente graves, aún latentes. Por otra parte, la hipótesis de la tregua o moratoria política y la movilización del sentimiento nacionalista, cuenta con el presupuesto de un índice más elevado de integración socio-política, lo que implica también la necesaria reducción de los costos militares y de represión.

Se da como un hecho o un supuesto, que una estrategia de ese tipo, podría implicar una fuerte movilización y un grado mucho más elevado de dirección administrativa de la economía, lo que sería compatible con el mantenimiento de la institucionalidad.

Por el contrario, el agravamiento de la crisis social y económica multiplicará inevitablemente la tensión social. Tal aumento de la tensión social, ya sea dentro de una hipótesis nacionalista con moratoria, o de la internacionalista con el F.M.I., multiplicará los riesgos de fragmentación al nivel de las instituciones políticas y de circunstancias no controlables lo que conlleva riesgos, riesgos que a su vez tendrán siempre como virtualidad, la tentación del golpe de Estado y por ende del retroceso.

Aceptado el presupuesto anterior y, tomando en consideración el nivel ya bastante elevado de movilización política, de la cual la campaña electoral pasada (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE) y la actual para Presidente, Diputados y autoridades municipales, es el mejor ejemplo, parece evidente que la opción para reducir, mantener o aumentar ese nivel de movilización, se ha convertido en determinante autónomo en la composición de cualquier análisis.

Voy en este momento a referirme a las variables o factores externos que intervienen con la restauración de la democracia. Ya con anterioridad la licenciada Karin de Maldonado nos ofreció su análisis sobre la realidad social guatemalteca haciendo una disección de la estructura de poder político real, así como de las variables o factores internos que intervienen en el proceso político actual para la democratización.

Por ello, saliéndome de la perspectiva doméstica, es preciso reconocer que en la matriz de transición es necesario tomar en cuenta un grupo de variables, que estando presentes en la matriz política autoritaria, lo seguirán estando en la matriz democrática. Me refiero a las variables externas.

Guatemala, como parte de América Central y del Continente, es un país sensible y vulnerable a los factores externos.

Douglas Chalmers, en "Developing of the Periphery External factors in Latin America" es citado por Alberto Klaveren, (*Revista Contribuciones* 3, de julio-septiembre 1984), para afirmar que las sociedades latinoamericanas se caracterizan como "sistemas típicamente penetrados" porque

entidades foráneas intervienen decisivamente en sus sistemas políticos.

Guatemala no se escapa a esta situación. Valdría la pena dar una ojeada a su pasado histórico para identificar mucho de esta penetración y, al momento es evidente su existencia. Bastará con comentar la forma como se sigue de cerca el proceso llamado de democratización, por parte de entidades y personas de Europa, de Estados Unidos de América y aun de nuestro propio continente que se han acercado a nuestro país para establecer que hay penetración.

Hay una proliferación de actores e interlocutores internacionales que afectan y reducen la autonomía de las decisiones internas en nuestro proceso de democratización, y que se encuentran presentes en la matriz autoritaria para conseguir su traslado a la matriz democrática y que por lógica conclusión deben ser tomadas en consideración en la transición, como fuerzas coadyuvantes para fortalecer tal proceso.

Basta también con analizar el peso de los factores externos en los procesos de democratización de varios países de América del Sur, para darnos cuenta de su importancia.

La derrota de las Malvinas en el caso de Argentina, tuvo como efecto no precisamente buscado, el paso hacia el régimen de Alfonsín.

Este incidió asimismo en el Uruguay; los conflictos económicos derivados de una pesada deuda externa, dieron como resultado la llamada apertura o descompresión brasileña, que a su vez, hizo en su momento, eco en el cambio Ecuatoriano y asimismo en el Boliviano.

Por otra parte, los nuevos estados americanos surgidos en lo que va de este último cuarto de siglo, han desarrollado una fuerte tendencia a dar otra realidad a la América.

Guatemala no está ajena a este proceso. Alberto Van Kleveren, ya citado, ensaya lo que se llama la crisis de la hegemonía norteamericana para explicar que los Estados Unidos de Norteamérica tienen una posición ambivalente y contradictoria en el proceso de democratización, por cuanto que su presencia en América asume una gran importancia para la cuestión de la democracia, tanto para favorecerla como para erosionarla. Esto, si se le coloca papel carbón, resulta ser también una consideración válida para nuestro proceso. Podríamos llamarla la primera variable. Luego, las relaciones internacionales de nuestro país, no ya sólo con gobiernos sino con entidades de toda índole, públicas y privadas han producido también una mayor interdependencia, transnacionalizando nuestro esquema autoritario, y a su tiempo el esquema democrático, pasando previamente por el esquema transicional.

Lo internacional de estos factores pugna por convertirse en nacional, interaccionando en la revalorización de lo nacional, mediante un juego de influencias recíprocas que se potencian en el campo político y un poco menos en el económico, pero que al momento conforman fuerzas cada vez más influyentes y participantes. Esta sería la segunda variable.

Analícemos a continuación la presencia de tres movimientos políticos internacionales en nuestras matrices.

El más antiguo de los tres, quería reeditar la experiencia soviética en un principio y, se constituyó en un fuerte antagonista clandestino que ha estado presente desde la primera mitad de este siglo en Guatemala.

Durante el seminario del Rol de los Partidos Políticos escuchamos en testimonio dirigencial, cómo en el movimiento de la Internacional Comunista es obvio el cambio operado con el paso de los años en la rigidez de la estrategia del partido comunista, que ha ido adoptando posiciones conforme las situaciones lo demandan.

Las corrientes eurocomunistas tienen influencia en los círculos políticos de algunos países americanos como Venezuela y México, lo que ha hecho evidente que los intereses de la internacional comunista tengan una connotación muy interesante.

Existe asimismo otra fuerza política transnacional, que es la Internacional Socialista cuya presencia es visible en Centro América desde Costa Rica, y que constantemente estrecha sus lazos en nuestra región y como consecuencia en Guatemala. En opinión de Van Kleveren (*Contribuciones* 3, julio-septiembre 84), "El carácter menos monolítico que tiene la Internacional Socialista, sugiere la imagen de un movimiento internacional con un alto componente nacionalizado en cada país latinoamericano, o bien la de una federación de partidos en que hay una identidad ideológica de naturaleza más bien general. Esta característica le ha permitido desempeñar papeles importantes en situaciones políticas muy diversas en la región".

En El Salvador, por medio de Manuel Ungo, presiona por un arreglo negociado apoyando la posición del Frente Democrático Revolucionario; en Nicaragua ha hecho ver por medio de Carlos Andrés Pérez, su descontento con la dictadura sandinista y en América del Sur, está presente en la consolidación de los regímenes democráticos que se han estrenado últimamente. Señalamos otra fuerza, quizás no monolítica y completamente integrada, aunque con una organización propia para América Latina. Me refiero a la Democracia Cristiana que es muy particular, quizás debido a sus diferentes orígenes. En Europa, donde surgió como una respuesta a la expansión de los movimientos comunistas y socialistas no es idéntica a la latinoamericana, donde surgió más bien como una corriente de presencia de ciertos grupos católicos y aun protestantes en el proceso de cambio de las oligarquías americanas. Es evidente la influencia que tiene también en la región y, aún más, muy cerca en El Salvador, amén de haber hecho gobierno en Venezuela y el Ecuador y ser una fuerza muy activa y presente en Chile.

Finalmente, existen otros movimientos políticos internacionales, como son CAUSA, que agrupa a los partidos y movimientos anticomunistas del mundo a través de la gestión y financiamiento de la secta munita del líder religioso coreano Moon; la Unión Democrática Internacional que agrupa a partidos liberales y conservadores de muchas partes del mundo; la conferencia permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPAL) liderada por el Partido Revolucionario Institucional Mexicano (PRI) y que pretende convertirse en una federación de partidos autóctonos, a pesar de que en el fondo es una sección de la Internacional Socialista.

Hemos de dedicar unas líneas a las doctrinas de seguridad nacional que tanta influencia han tenido en los regímenes autoritarios americanos y que están presentes en el esquema de acción de las fuerzas armadas de Guatemala. Esta doctrina tiene un alto grado de componente internacio-

nal, y busca la movilización de la nación en la realización de lo que llaman "valores de la Nacionalidad" y su preservación, a través de ciertos objetivos cuya definición corresponde a las cúpulas de mando. Evidentemente, hay una teoría común que se transmite a través de instituciones, programas de enseñanza y aspectos de cooperación militar interamericana.

En otro orden, se hacen presentes en nuestra escena nacional, las organizaciones laborales, algunas como la Oficina Regional Interamericana del Trabajo (ORIT), que está presente aun en la matriz autoritaria, pese a que muchas veces sus dirigentes se han visto perseguidos, pero que han conseguido el respaldo de la Federación Americana del trabajo y, en tal forma, han podido sobrevivir y hasta participar en los organismos locales donde han tratado de representar a los trabajadores; la Confederación Latino Americana de Trabajadores (C.L.A.T.) que hace acto de presencia en la preparación y organización de cuadros dirigentes de sindicatos claves que se han significado por el peso que tienen en los sectores de producción financieros y de transporte, y que con seguridad aumentaron su presencia en el proceso de democratización y finalmente, la Federación Sindical Mundial y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, comunista la primera y socialdemócrata la segunda, que indiscutiblemente se harán presentes en la democratización que arrancará el 14 de enero próximo entrante.

Es preciso, entonces, tomar en consideración y destacar la importancia del proceso de transición para que la complejidad de las influencias que encierran estas potencialidades, no se tornen en momentos difíciles para la vida democrática de nuestro país.

Conviene además hacer una toma de conciencia sobre las consecuencias que para el proceso de democratización tiene la inclusión de Guatemala en el sistema capitalista internacional. Y aquí prefiero seguir el informe anual de las Naciones Unidas, que marca a la economía mundial, y por qué no la nuestra, con el sello de la incertidumbre.

En un documento elaborado para el departamento de asuntos económicos y sociales internacionales de la ONU, se señala que la deuda externa del mundo en desarrollo, las trabas proteccionistas de los países industrializados, junto al déficit fiscal y comercial y las tasas de interés estadounidense, producen incertidumbre sobre el futuro de la economía, tanto mundial en lo general como de los países en desarrollo. En particular, Guatemala no puede escapar de esa situación de incertidumbre, porque zozobramos a cada rato, y podemos llegar de nuevo, a la debacle fatal en un regreso al autoritarismo, conforme lo exponen muchos analistas que establecen un vínculo muy estrecho "entre los cambios registrados en la evolución del capitalismo mundial y las formas del Estado en América Latina".

Estos autores, postulan que el surgimiento o la vuelta a regímenes autoritarios representan la consecuencia de la evolución de los patrones de acumulación del sistema capitalista internacional.

Recuérdense en este caso que ya no se trataría de un régimen autoritario transitorio, si no de la única forma de régimen que puede asumirse como resultado de la lucha por la sobrevivencia, buscando en consecuencia o el apoyo de los dólares o el apoyo de los rublos, en ambos casos, es la

consecuencia del debate de marxistas y no marxistas en torno a las teorías de la dependencia y del imperialismo, donde no faltarán los conceptos de intercambio desigual; desarrollo desigual y enfoque de sistemas mundiales.

Parece útil, después de lo expuesto, hacer una primera aproximación a la pregunta principal que estamos suscitando, sobre si vamos a tener un gobierno coheso y un proyecto político democrático consistente, simplemente por el entrecruzamiento de estas dos hipótesis: retroceso político o no, con o sin la obtención de un mayor apoyo o respaldo de más.

La hipótesis del retroceso significa la ruptura del poder vigente con su propia legalidad. Golpe de Estado que implica el retorno de los militares al escenario político, la suspensión de garantías del Estatuto Fundamental de Gobierno y la ruptura de la Ley Electoral Específica acompañada de la reedición de los instrumentos de gobierno, a lo mejor los Tribunales de Fuero Especial, etc.

La hipótesis de no-retroceso, da origen a su vez a dos subhipótesis:

a) Continuar con las actuales reglas de juego hasta la elección de Presidente y demás cargos institucionales por medio de sufragio libre;

b) Modificación del statu-quo, para anticipar las elecciones, la toma de posesión de los electos y puesta en vigencia de la nueva Constitución.

Encontramos en la hipótesis de retroceso, el rompimiento del proceso de democratización preestablecido buscando al mismo tiempo, apoyo plebiscitario o un retroceso puro y simple con apoyo militar. Cualquiera de las dos dificultará la producción de un proyecto político viable para mediano o largo plazo. Este modelo sería resistido dada la complejidad de la problemática del país.

En la hipótesis de no retroceso se busca proseguir buscando apoyo para una elección libre en noviembre, con la finalidad clara y precisa, de configurar un gobierno completo dentro de la Constitución a corto plazo, a través de una negociación entre y con las fuerzas nacionales y buscando su apoyo.

Esta hipótesis es la que buscamos como más probable. Es aquí donde se impone una solución negociada que asegure la permanencia del nuevo gobierno con la representación que se le otorgó. Esta hipótesis cuenta con la necesaria participación popular, regida fundamentalmente en nuestro caso y oportunidad, por razones utilitarias, dadas las condiciones económicas y sociales existentes, y no adquirirá carácter incontrolable, en tanto las dirigencias políticas conserven niveles adecuados de credibilidad, y aun cuando las dificultades o cuestionamientos económico-sociales sean enormes. Parece acertado, a la luz de lo analizado, que las élites políticas y sus dirigentes, vale decir, los candidatos presidenciales, dado el carácter primario y prepotente que tiene en este momento la elección presidencial, puedan obtener un período de tolerancia, de espera, de tregua, para encontrar soluciones, si junto con la fuerza hegemónica y bloque en el poder se llega a un acuerdo o conciliación política que enfoque responsablemente las urgencias del país. Estas pueden sintetizarse así:

a) La consolidación democrática y el derecho a gobernar de acuerdo al resultado electoral, lo que también implica el mantenimiento de un

auténtico Estado de derecho;

b) La elaboración y compromiso de ejecución de un programa mínimo de gobierno que sea común, producto del análisis responsable de las urgentes necesidades de Guatemala y sus satisfactores mediatos e inmediatos, y

c) La organización de un gobierno de unidad nacional que otorgue representación a las corrientes políticas con participación en el Congreso de la República por instalar.

CONCLUSION

- I La democratización que pide Guatemala, contradice los criterios economicistas para los cuales la democracia florece en la prosperidad. La actual situación recesiva y de aguda pobreza que se vive, ante las sustanciales reducciones de las tasas de crecimiento en general, obliga a que se hable de una conciliación política como precondition para enfrentar la crisis económica y consolidar y fortalecer el proceso de democratización de la República. Hablamos ahora de una democracia consociacional no competitiva. Por democracia consociacional entiendo una forma de organización sociopolítica democrática, no competitiva entre partidos o fuerzas populares, porque todos son socios en igualdad de condiciones con respecto a los demás.
- II Las contracciones económicas, sociales y políticas permanecerán con o sin entendimiento político, pero su superación será viable con entendimiento.
- III Este entendimiento requiere de actores e interlocutores flexibles, y esta flexibilidad tiene como marco jurídico la estructura legítima que empieza a darse en muchos aspectos capitales y que puede marcar el principio de una nueva época de democratización real y efectiva.
- IV El aprovechamiento decisivo de estas condiciones asegura una democratización progresiva cuyo principio queda en manos de una decisión política, que debe ser adoptada con mayor facilidad por los líderes políticos que en este momento son los candidatos a la Presidencia de la República con la concurrencia de todos los sectores que detentan el poder real a lo interno y a lo externo como quedó demostrado.

Quiero aquí recordar los tres tipos de objetivos que la Licenciada Karin de Maldonado, diferencia en su análisis de la estructura de poder; aquellos para quienes es indiferente el tipo de régimen político por cuanto que su objetivo es el "mantenimiento primordial de estructuras y privilegios existentes"; los que buscan "la transformación paulatina del orden existente hacia un nuevo orden social que satisfaga las necesidades y aspiraciones de todos los miembros de la comunidad"; para quienes un orden cambiante para mayor justicia es un pacto; y quienes tienen por objetivo la destrucción profunda del orden existente y su SUSTITUCION VIOLENTA por un nuevo orden social, mediante regimenes dictatoriales encapuchados de populares.

V PROPOSICION FINAL:

En este momento, es de gran trascendencia una sincera definición de profunda fe en la democracia como sistema político que permite una forma de vida republicana. Los candidatos a la Presidencia de la República, debieran iniciar cuanto antes comunicaciones que exploren la viabilidad de un compromiso entre ellos y todos los grupos de poder, que permita determinar una transición exitosa entre los regímenes autocráticos y democráticos.

Esta transición deberá tener por objetivos:

1. Otorgar la confiabilidad en que el proceso electoral y el poder público que habrá de surgir de tal proceso determinarán una relación estrecha entre el ejercicio de la soberanía del pueblo y la expresión pública de su voluntad.

2. Garantizar plenamente:

La generación de representatividad.

La generación de legitimidad.

La generación de autoridad y gobierno de servicio.

3. Respetar el pluralismo político en igualdad real y formal.

4. Consolidar el proceso de democratización del país.

5. Responsabilizar la preocupación común de atender en conjunto los intereses vitales y perdurables de la nación, mediante formas de convivencia que es necesario ampliar, a través de una acción total de solidaridad humana.

6. Comprometer la acción y la responsabilidad de los partidos políticos y las estructuras de poder real para alcanzar:

6.a La plena constitucionalidad y el derecho a gobernar conforme los resultados electorales.

6.b La unidad popular solidaria durante el tiempo necesario para obtener el fortalecimiento integral de una democracia guatemalteca consociacional.

6.c La elaboración y el sostenimiento de un plan mínimo de gobierno que sea respuesta a las urgencias prioritarias del país, mediante puntos de un programa de trabajo común de los partidos políticos y adoptado por ellos con el compromiso de ser ejecutado por el Candidato a la Presidencia que resulte ganador.

7. Una tregua política y convivencia interpartidista, las que serán garantizadas por una comisión interpartidista de unidad.

8. Que las organizaciones sociales, como sindicatos, cooperativas, cámaras y otros, que funcionan hasta ahora como grupos de presión de claro sentido hegemónico, no actúen preocupados como hasta ahora por el bien parcial de su grupo, sino que adecuen sus intereses al bien común general del país, creando sistemas de intereses y lealtades para reclutar personas y adquirir recursos, de manera de evitar una partidocracia débil, colocando en su lugar un sistema de instituciones permanentes comprometidos en políticas públicas que incorporen las demandas sociales.

PROYECTO DE BASES CONSIDERATIVAS Y ACUERDO DE CONSOLIDACION POLITICA

Los suscritos, Candidatos a la Presidencia, después de considerar en forma clara, detenida y sincera, los elementos que componen y hacen la realidad histórica nacional y que asimismo, forman la estructura de poder real y formal; sintiéndonos responsables de ofrecer a todos nuestros conciudadanos el mejor de nuestros esfuerzos para iniciar un proyecto histórico que mediante la consolidación de los principios democráticos, posibilite la Seguridad social, política y económica que requiere el país entero para alcanzar su bien común, hemos llegado a un pleno acuerdo de unidad y cooperación en lo personal, el que haremos extensivo a las respectivas organizaciones políticas que nos postulan, sobre las bases y mediante las consideraciones siguientes:

- I. El análisis de los antecedentes históricos, políticos y sociales que en distintos foros se han realizado, con la participación de los varios sectores que conforman la sociedad guatemalteca; la ponderación comprensiva de los intereses lícitos y justos de los mismos sectores; el reconocimiento de la existencia de una composición real del poder político y económico, así como el deseo mayoritariamente expresado a través de una campaña electoral que dio como resultado libre y espontáneamente obtenido, una representación popular que otorgó legitimidad a una Asamblea Constituyente que con las naturales divergencias, aprobó finalmente una Constitución política para Guatemala, que será el marco teórico fundamental que dará paso al estado de derecho.
- II. El interés expresado en diversas formas por diferentes sectores de población para que el proceso electoral se lleve a cabo dentro de las más genuinas pautas democráticas; que las Fuerzas Armadas a través de su jerarquía han reiterado su decisión de propiciar en los actuales momentos así como respaldar en el próximo futuro, todo esfuerzo tendiente a consolidar los principios democráticos, determinando al propio tiempo la redefinición de su rol dentro del marco institucional que le asigna la nueva Constitución de la República.
- III. Que la experiencia democrática de Guatemala y sus instituciones es lejana, pues su plenitud sólo se ha experimentado en fracciones de tiempo que no han sido suficientes para determinar en la ciudadanía en particular y en el pueblo todo en general, una vivencia permanente a lo largo de la historia de independencia política que emane de una cultura política y cívica participativa de tanta importancia para la estructuración de un orden nuevo consociacional no competitivo, que posibilite una solución razonable a los problemas que por su carácter de URGENCIAS NACIONALES deben atenderse de inmediato sobre bases de legitimidad, legalidad y lealtad política.
- IV. Que aún subsisten problemas que son de solución difícil y delicado y cuidadoso manejo como son las secuelas de la lucha contra la subversión, que requieren del consenso para su corrección, a fin de crear un sistema de intereses y lealtades que a manera de frente político, tienda asimismo a la consolidación de la democracia como

objetivo fundamental para la pacificación del país por la justicia y el diálogo, que asimismo permita situar la violencia en una dimensión delictiva.

V. Conscientes de que es necesario el compromiso personal y organizativo en una política nacional de largo alcance que se desarrolle entre y a partir de la seguridad de que el proceso electoral y los poderes públicos que surgirán, respondan a la libre determinación del pueblo guatemalteco y la garantía de que tal proceso electoral no sólo contribuya a fortalecer el frente que se constituya, sino que lo robustezca mediante la prolongación de una tregua política, la erradicación de la violencia interpartidista y la despersonalización de los debates, a manera que la campaña sea una escuela de civismo y de comportamiento ejemplar que contribuya a la estabilidad democrática de la República.

VI. Convencidos de los principios considerados, comprometamos nuestra acción y esfuerzos responsables en los términos siguientes:

1o. A defender la Constitucionalidad y respetar el derecho de gobernar conforme la decisión libremente manifestada por el pueblo de Guatemala en los resultados de las elecciones generales del 3 de noviembre del presente año y la eventual segunda vuelta en la elección Presidencial de diciembre del mismo año. Este compromiso, se extiende a rechazar y a negar colaboración a cualquier tipo de golpe de Estado o situación de fuerza que pudiera surgir de un hecho subversivo cualquiera.

2o. El Presidente Constitucional, deberá organizar su gobierno, para la democracia consociacional, en la cual se establezca una unidad popular defensiva y fortalecedora de la democracia guatemalteca como sistema. En consecuencia, ninguno de los signatarios aspira ni acepta hegemonías en el Consejo de Ministros y el gobierno en general, en el cual estarán representadas las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes del país, en base a una selección de capacidades.

3o. Acordamos concurrir al proceso electoral sosteniendo un programa mínimo de gobierno que sea común y cuya ejecución por quien resulte electo constituya el punto de partida de una democrática administración nacional en materias tales como: Política económica; Política de administración y Gobierno; Política social, laboral y educacional; Política ecológica y de recursos naturales; Política institucional. Este programa se redactará por separado y constituirá parte de este Acuerdo, será elaborado por una comisión integrada por dos representantes de los Candidatos signatarios que nombraremos y acreditaremos dentro de los ocho días hábiles de suscrito el presente acuerdo.

4o. Reconocemos que los anteriores acuerdos son compatibles con la pluralidad política, ya que las posibles contradicciones o divergencias de planteamientos interpartidistas corresponden a la esencia de la actividad democrática. Al propio tiempo creemos firmemente que la adhesión a los principios y bases de este acuerdo por parte de todas las fuerzas políticas, organismos profesionales,

gremiales, cívicos, culturales y de servicio, la prensa escrita, radial y televisiva, así como la Iglesia Católica y las otras iglesias, consolidará el proceso democratizador y permitirá el desarrollo de una constitucionalidad estable que tenga en sus bases el equilibrio democrático, la honestidad y probidad administrativas y la fidelidad a la norma institucional.

Invitamos en consecuencia a todos esos organismos e instituciones, a que sin prejuicio de sus concepciones específicas, respalden nuestro compromiso en favor de la celebración del proceso electoral pacífico, la consolidación de la democracia real y participativa como proceso de arribar a un nuevo orden cada vez más satisfactorio que se funde en el derecho del pueblo guatemalteco, a gobernarse por sí mismo y asegure la vigencia permanente y efectiva de los derechos humanos, su desarrollo y protección.

Miguel von Hoegen

PRESENTACION

Señores miembros de la mesa directiva, señoras y señores de la audiencia.

Por tercera vez en este seminario^{1/}, vamos a decir lo que se indicó en su presentación el primer día: Después de cinco años, o sea desde nuestro Primer Seminario sobre la Realidad Nacional realizado en 1980, en el cual abundamos en la fundamentación y descripción estadística de la crisis y sus causas, entramos en este Segundo Seminario sobre la Realidad Nacional a la parte de propuestas de soluciones a la crisis; o sea, ahora no vamos a abundar en la cita de datos, sino vamos a presentar una propuesta de modelo económico para el desarrollo de Guatemala.

La exposición tiene dos puntos de referencia: El primer punto de referencia son las tres exposiciones que ustedes ya han escuchado, de las cuales es de utilidad citar algunas frases: Decía el Licenciado Héctor Rosada anoche que la contradicción fundamental entre aquel que explota y aquel que es explotado, sólo podrá resolverse si se transforma el orden estructural vigente; sin embargo, decía anoche el Licenciado Rosada que en periodos de transición es posible intentar su conciliación; más adelante indicó que el nuevo orden, o el nuevo ordenamiento social, deberá considerar la participación organizada de la población, y subrayó la palabra organizada, aunque el Licenciado Rosada no lo hizo, como la base fundamental de su dinámica interna para descartar la opción violenta y asumir con absoluta entrega la opción racional: Dialogar en lugar de matar.

Siempre como parte del primer punto de referencia en relación a las exposiciones de anoche, la Licenciada Karin Erbsen de Maldonado decía: Se asume que el próximo gobierno se enmarca dentro del tipo de objetivos

1/ Ver presentación del Seminario, Miguel von Hoegen.

que implica el uso de medios políticos, la transformación paulatina del orden existente hacia un nuevo orden social que satisfaga las necesidades y aspiraciones de todos los miembros de la comunidad; o sea, como punto de referencia su exposición optó por un orden cambiante, lograr una mayor justicia dentro del marco de un pacto.

Finalmente, dentro de las exposiciones de anoche, decía el Licenciado Carlos Escobar Armas: Tenemos dos hipótesis, tenemos dos opciones: Una, un golpe de estado que no permita que nosotros lleguemos a las elecciones, y la otra, que habrá elecciones libres que permitan iniciar el proceso de democratización política y económica del país.

El primer punto de referencia de esta exposición se resume diciendo que el enfoque económico dé solución a la crisis que se presenta asume que no habrá un golpe de estado y sí vamos a iniciar un proceso de democratización, a través de dialogar en lugar de matar, a través de la transformación paulatina del orden existente hacia un nuevo orden social que satisfaga las necesidades y aspiraciones de todos los miembros de la comunidad nacional.

El segundo punto de referencia es que el modelo de desarrollo seguido por el país durante los últimos 20 ó 40 años está obviamente agotado; tenemos que optar e identificar nuevos modelos de desarrollo; dentro de esos nuevos modelos de desarrollo escoger uno y tomar las medidas de política que sean consistentes con él, para evitar que unas medidas anulen los efectos de otras y se pierda así el costo social que representa su ejecución.

El modelo de desarrollo que deseamos presentarles como una opción para resolver la crisis actual es el de la Economía Social de Mercado.

1. INTRODUCCION

La Economía Social de Mercado tiene su origen en dos grandes corrientes: Por un lado en elementos de la escuela liberal, la que pregona una economía de mercado; y por el otro lado elementos del humanismo económico, o sea en una inspiración netamente cristiana; y cuando hablamos hoy de inspiración cristiana no me refiero a ninguno de los dos partidos políticos^{2/} que llevan el nombre de cristiano, sino me refiero a los principios social cristianos incluidos en las encíclicas sociales de la Iglesia Católica. Y con esta breve introducción entro a describir los principios económicos de la Economía Social de Mercado.

2. PRINCIPIOS DE LA ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO

2.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

El primer principio fundamental de la Economía Social de Mercado es la libertad económica: La Economía Social de Mercado no puede funcionar si no existe libertad total dentro del sistema económico y, por lo tanto, libertad política, dado que antes de tener libertad económica se requiere de libertad política, la que es prerrequisito de la libertad económica; o sea, dentro de un sistema socialista o comunista no puede funcionar la

Economía Social de Mercado, como tampoco puede funcionar dentro de un sistema fascista, dado que en ambos no existe libertad política y por lo tanto tampoco libertad económica. La razón de ser de la necesidad de la libertad económica para que pueda funcionar el modelo que estamos describiendo hoy es que el crecimiento económico como motor de desarrollo se basa en la libre competencia entre empresas y entre actividades económicas.

El segundo principio fundamental es que todos los segmentos poblacionales deben de tener acceso al beneficio del crecimiento económico; este segundo elemento es netamente de inspiración cristiana. El tercer elemento, que es un elemento sombrilla o común denominador a los dos elementos anteriores, es la existencia de un estado fuerte pero pequeño o reducido; se entiende por un estado pequeño o reducido al que no tiene una ingerencia grande en la generación del producto nacional bruto, y fuerte al que puede asegurar que los dos elementos mencionados con anterioridad se cumplan. Al respecto debe efectuarse unas aclaraciones: Dentro del sistema liberal, o sea dentro del sistema netamente capitalista liberal, el proceso económico tiende a ahogar, o a hacer desaparecer la competencia, a través del surgimiento de transnacionales, de monopolios y de carteles; esa es una razón por la que se necesita dentro de la Economía Social de Mercado un estado fuerte que no permita que la competencia desaparezca; además, se necesita un estado fuerte para asegurar que todos los estratos poblacionales tengan acceso al beneficio del crecimiento económico o material. Un estado débil corre el peligro de que ninguna de esas dos condiciones se logren y, por lo tanto, se extinga el modelo que describimos.

2.2 PRINCIPIOS SUBSIDIARIOS

En base a los tres principios fundamentales indicados, o sea: La libre competencia como motor del crecimiento económico, el acceso de toda la población a los beneficios del crecimiento económico y la existencia de un estado fuerte que asegure y vele porque los otros elementos sobrevivan; se describen a continuación diez elementos o principios subsidiarios del modelo de Economía Social de Mercado.

El primer principio es que para el funcionamiento normal de una economía basada en el modelo de Economía Social de Mercado se requiere estabilidad monetaria; las razones que fundamentan el requerimiento de la estabilidad monetaria son las siguientes:

La primera razón es que si no existe estabilidad monetaria, se desarrolla un proceso de concentración de la riqueza y capacidad de compra en estratos altos; por ejemplo, con el proceso inflacionario que estamos viviendo hoy en Guatemala, el que posee activos fijos como una casa, un terreno, etc. mantiene su capacidad de compra dado que el precio de esos activos fijos tiende a subir más o menos con el ritmo inflacionario; en cambio los estratos pobres que sólo tienen algunos quetzales en la bolsa, pierden capacidad de compra. La importancia de la razón en mención está en el hecho de que a través del proceso inflacionario se gesta un proceso oculto de mayor concentración de la riqueza y del ingreso, lo que constituye una fuente de inestabilidad social y política que hace peligrar el

2/ Partidos Democracia Cristiana Guatemalteca y Partido Social Cristiano.

buen funcionamiento del sistema económico y social; este elemento de inestabilidad social y política se trata de nuevo más adelante.

La segunda razón es que una economía en crecimiento necesita invertir y para ello necesita ahorrar; pero en época de inflación o inestabilidad monetaria, en lugar de ahorrar las personas tienden a gastar, dado que es mejor gastar hoy que mañana cuando los precios ya han subido.

La tercera razón por la que la Economía Social de Mercado requiere estabilidad monetaria o de precios es que los empresarios necesitan mantener su capacidad de compra para renovar constantemente su ciclo productivo; para ejemplificarlo hablemos de los comerciantes: Si un comerciante tiene cien unidades de un artículo y los vende en el transcurso de un período inflacionario, ese empresario obviamente le va a subir el precio a los artículos para asegurarse poder comprar nuevamente las unidades vendidas y mantener su ciclo de venta. Lo anterior refleja la gestación de un proceso inflacionario que puede auto-alimentarse en forma tal que no tiende necesariamente a un equilibrio; o sea, el comerciante le tiene que subir de precios a los artículos para asegurarse que cuando renueve su inventario tiene el suficiente efectivo para volverse a surtir.

Se puede seguir ejemplificando la necesidad de la estabilidad monetaria, pero los ejemplos que se han dado son suficientes para fundamentar la importancia del principio de estabilidad monetaria en un modelo de Economía Social de Mercado.

El segundo principio de la Economía Social de Mercado es que la tasa de cambio de la moneda nacional en relación a las otras monedas debe ser realista, o sea que la moneda no debe estar ni sobrevaluada ni subvaluada, dado que si se tiene una moneda sobrevaluada no se logra vender en el mercado mundial lo que se desea exportar y se pierde el mercado, y si se tiene una moneda subvaluada se está subsidiando al consumidor extranjero a costa del trabajador nacional, aunque con ello se tienda a generar fuentes de trabajo por la alta demanda de las exportaciones nacionales baratas.

O sea que ninguno de los dos extremos es válido dentro de un modelo de Economía Social de Mercado: La moneda no debe estar sobrevaluada porque se pierde el mercado internacional, ni debe estar subvaluada porque se subsidia al consumidor extranjero. Sin embargo, cuando el país no enfrenta libertad de mercado en el mundo sino que enfrenta cuotas y barreras al comercio internacional, o sea no encuentra competencia perfecta en el mercado internacional, el principio de un cambio realista debe ser revisado y llevado a la práctica con cuidado.

El tercer principio indispensable para que funcione la Economía Social de Mercado es la propiedad privada: El dueño de los medios de producción tiene derecho a las utilidades pero tiene obligación de asumir las pérdidas en que incurra; o sea que no debe permitirse que una actividad económica o una empresa, aunque genere empleos, se le cubran sus pérdidas a través de fondos públicos.

El cuarto principio se refiere a que no debe otorgarse subsidios permanentes a actividades económicas o a empresas específicas: Las empresas deben asumir todos sus costos de producción y evitar el caso

común de hoy en día en que las empresas no asumen todos los costos de producción, como por ejemplo en el caso de la contaminación ambiental en el Lago de Amatitlán en donde empresas agrícolas e industriales han contaminado el lago, y el costo del proceso de rescate se pagará a través de recursos estatales, con lo que se está subsidiando a los industriales y a los empresarios agrícolas que han contaminado dicho lago. En resumen, un empresario debe responsabilizarse por los costos totales de su producción y no descansar sobre los ingresos del gobierno, a través de los impuestos que pagan todos los ciudadanos, para subsidiar su producción, dado que cuando el gobierno, el estado o una sociedad subsidia una actividad económica, no se está asignando en forma óptima los recursos productivos.

El quinto principio se refiere al hecho de que los impuestos no deben ser confiscatorios; al respecto observen ustedes lo que ha pasado en ciertos países europeos donde se paga hasta el 55%, el 60%, el 70% o más del ingreso en impuesto sobre la renta, lo que desincentiva incrementos en la producción y en la productividad. Es esa la razón por la que dentro de los principios de este modelo se indica que no debe tenerse una estructura tributaria que confisque el ingreso, aunque por justicia tributaria debe pagar más tributo el que tiene mayor capacidad de pago.

El sexto principio se refiere al hecho de que el estado no debe intervenir en la planificación y en la dirección de los procesos de mercado; el estado, en otras palabras, no debe intervenir en la fijación de los precios, dado que los precios dentro de un modelo de Economía Social de Mercado deben ser fijados en el mercado. Pero más que en la fijación de precios debe señalarse que el estado no debe intervenir en la producción de bienes y servicios, excepto en aquellos rubros o actividades en que la iniciativa privada no entra, como por ejemplo defensa e impartición de justicia; o sea en aquellos casos donde no se puede aplicar el principio de exclusión en el consumo o goce del bien o del servicio.

El séptimo principio es que los objetivos, las políticas y las estrategias de desarrollo impulsadas por el estado deben ser claras, consistentes y permanentes, dado que si el sector privado o los empresarios no conocen y confían en la estabilidad el programa de desarrollo impulsado por el gobierno, se tenderá a sacar el capital del país o a invertir únicamente en proyectos que brinden un rendimiento de corto plazo.

El octavo principio es que la Economía Social de Mercado requiere de estabilidad social y política para poder funcionar eficientemente; una sociedad que no sea estable, social y políticamente, no puede optar por la Economía Social de Mercado. La estabilidad en mención se logra a través de los principios cristianos ampliamente desarrollados en las encíclicas sociales de la Iglesia Católica, aunque no se requiere ser católico para entenderlos y aceptarlos; al respecto debe mencionarse dos elementos: El elemento de solidaridad y el elemento de subsidiariedad.

El elemento de solidaridad, dentro de una visión cristiana, y les ruego perdonen lo extraordinariamente simplista de la exposición, pero la tengo que hacer breve, se refiere a que dentro de un conglomerado social es obligación de todos compartir el ingreso o bienestar con aquel que no tiene el nivel de ingreso o bienestar como el propio.

El elemento de subsidiariedad se refiere a que esa obligación de compartir debe hacerse en tal forma que sea una ayuda para la autoayuda; esa es una concepción nueva de la caridad cristiana, opuesta a la antigua que se materializaba en la limosna paternalista.

El noveno principio, íntimamente ligado con el principio de la estabilidad política y de la estabilidad social, es que todos los miembros de una sociedad deben poder satisfacer sus necesidades básicas; sin la satisfacción de las necesidades básicas no hay estabilidad social y tampoco habrá estabilidad política.

Dentro de la satisfacción de las necesidades básicas en un país como Guatemala, donde una tercera parte de la población vive por debajo del nivel de pobreza extrema y otra tercera parte por debajo del nivel de pobreza en general, se debe tener presente que incluso para la satisfacción de las necesidades básicas, no siempre el camino mejor es hacerlo a través del Sector Público, dado que es muy posible lograrlo en forma eficiente a través de lograr un crecimiento económico que genere fuentes de empleo para todos en lugar de estar atendiendo necesidades básicas a través de subsidios directos a la población. Otra forma eficiente puede ser atender la satisfacción de las necesidades básicas a través de organismos no gubernamentales sin fines de lucro.

Para concluir, el décimo principio se refiere a que la distribución del poder de toma de decisiones económicas debe ser clara y no concentrada, lo que se puede ejemplificar con dos casos: El primero es que la banca central debe ser autónoma y por lo tanto independiente del organismo ejecutivo; y el segundo ejemplo, dentro del principio de subsidiariedad, es que el gobierno central no debe intervenir en las decisiones económicas que pueden tomarse en el sector privado o en los gobiernos locales, municipales, departamentales o regionales.

3. VIABILIDAD DE UNA ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO EN GUATEMALA

Después de haber presentado los tres principios fundamentales y los diez principios subsidiarios de un modelo de Economía Social de Mercado, deseamos presentarles algunas consideraciones sobre la viabilidad de esos principios en Guatemala, para que se tenga claro el campo en que se tendrá que trabajar si se desea optar por introducir en Guatemala un modelo de esta naturaleza.

3.1 LA CONSTITUCION POLITICA DE GUATEMALA

La nueva Constitución Política de la República, desde su preámbulo, garantiza el bien común, por lo que es consistente con un modelo de Economía Social de Mercado; o sea que la sociedad guatemalteca deberá de ser de tal forma que todos participen en el beneficio de la riqueza. En el marco de lo expresado en el preámbulo, en el articulado de la Constitución se encuentran varias referencias directas e indirectas que desarrollan el principio del bien común y por lo tanto viabilizan el desarrollo de una Economía Social de Mercado. Adicionalmente a lo indicado, la Constitución es consistente con la Economía Social de Mercado al garantizar la propiedad privada, proteger la competencia en la economía y condenar el

monopolio, los oligopolios y los carteles.

A pesar de lo expuesto, la Constitución asigna al estado una responsabilidad grande en la conducción de la economía, por lo que una administración pública futura puede intervenir directamente en la producción de bienes y generación de servicios, con lo que se estaría optando por un sistema de estatización de la economía, lo que es inconsistente con los principios del modelo de Economía Social de Mercado.

Adicionalmente, la entidad responsable de la política monetaria es en Guatemala la Junta Monetaria, la que según la Constitución se integra con ocho miembros, de los cuales cuatro son representantes del Organismo Ejecutivo, por lo que la misma no tiene el suficiente grado de independencia que se hubiera deseado; o sea, dada dicha representación, el Organismo Ejecutivo puede optar por financiar programas estatales sin recurrir a un financiamiento sano, entendiéndose por tal el que proviene de impuestos o de colocación de bonos en el público, lo que presiona por un proceso inflacionario o de inestabilidad monetaria y por lo tanto contradice uno de los principios de la Economía Social de Mercado.

Otro elemento preocupante en la Constitución es que, dentro del marco de la subsidiariedad que requiere la Economía Social de Mercado en relación a transferir responsabilidades del gobierno central a gobiernos locales, municipales, departamentales o regionales, se quitó a los gobiernos municipales la autoridad que tenían en la Constitución de 1965 de imponer arbitrios y contribuciones, la que ahora se trasladó al Congreso de la República.

Lo anterior se complementa con el hecho de que se le asigna a los gobiernos municipales el ocho por ciento (8%) del presupuesto nacional, pero esa asignación preocupa a su vez en dos sentidos: En el primer sentido preocupa porque vuelve más dependiente al gobierno municipal del gobierno central de lo que era anteriormente, dado que su fuente de financiamiento ya no es la comunidad que lo eligió sino la autoridad central; en el segundo sentido preocupa porque el gobierno municipal no tiene ahora necesariamente que afrontar el problema de financiar la solución a los problemas locales con la población que lo eligió, sino que el financiamiento para la solución de problemas la tendrá que negociar con la autoridad central. Una solución intermedia hubiera sido agregar en la Constitución que la asignación del ocho por ciento (8%) del presupuesto del Estado se otorgaría a los gobiernos municipales siempre y cuando los beneficiarios aportaran parte de los recursos para financiar la ejecución de proyectos. A pesar de lo expuesto, afortunadamente se establecieron, dentro del mismo principio de subsidiariedad, los consejos de desarrollo regional y departamental, pero desafortunadamente se indica que los gobiernos locales se comunican con el Organismo Ejecutivo a través de ellos en lugar de indicar lo contrario; o sea que la concepción es que el punto focal es el gobierno central y no los gobiernos regionales, departamentales, municipales y locales.

3.2. LOS FACTORES ECONOMICOS-SOCIALES

El motor de crecimiento y desarrollo económico en una Economía Social de Mercado es el mercado; sin embargo en Guatemala, donde sólo